



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

## **TRABAJO FIN DE GRADO**

### **GRADO EN DERECHO**

**Derecho administrativo, financiero y procesal**

**Derecho procesal**

**Curso 2019/2020**

## **PROCESO PENAL Y JUICIOS PARALELOS**

**Nombre del/la estudiante: Helena Fernández García**

**Tutor: Adán Carrizo González-Castell**

**Mes: Junio**

**Año: 2020**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**GRADO EN DERECHO**

**Derecho administrativo, financiero y procesal**

**Derecho procesal**

**PROCESO PENAL Y JUICIOS  
PARALELOS**

**CRIMINAL PROCESS AND TRIALS  
BY MEDIA**

**Nombre del/la estudiante: Helena Fernández García**  
**e-mail del/a estudiante: [helena2105@usal.es](mailto:helena2105@usal.es)**

**Tutor/a: Adán Carrizo González-Castell**

## RESUMEN

En este trabajo se estudiará el fenómeno de los juicios paralelos, un asunto de actualidad, y su influencia en los procesos penales.

Se analizará la lesión que en ocasiones este fenómeno produce en ciertos derechos fundamentales protagonistas durante el proceso, prestando especial atención a los casos de violencia sobre la mujer donde estos juicios tienen más repercusión. Además, veremos como la era digital en la que vivimos ha propiciado y multiplicado este fenómeno.

Este trabajo recopilará información acerca del fenómeno, para comprenderlo mejor, conocer sus causas, efectos y posibles soluciones. Aunque es cierto que los juicios paralelos solo se dan en caso muy determinados, es una necesidad democrática e ineludible en un Estado de Derecho intentar poner fin a los mismos

**PALABRAS CLAVE:** juicios paralelos, proceso penal, derechos fundamentales y medios de comunicación.

## ABSTRACT

This paper will study the phenomenon of trials by media, a current issue, and its influence on criminal process.

It will analyze the damage that this phenomenon sometimes causes to certain fundamental rights during the process, paying special attention to cases of violence against women where these trials have more impact. In addition, we will see how the digital era in which we live has fostered and multiplied this phenomenon.

This work will gather information about the phenomenon, in order to better understand it, know its causes, effects and possible solutions. Although it is true that parallel trials only occur in very specific cases, it is a democratic necessity and unavoidable in a state of law to try to finish them.

**KEYWORDS:** trials by media, mass media, criminal process.

## ***ÍNDICE DE CONTENIDO***

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>5</b>
<b>2. JUICIOS PARALELOS Y PROCESO PENAL</b>	<b>7</b>
a) Definición y doctrina	7
b) Derechos afectados e interpretación doctrinal	10
i. Derecho a un juez imparcial	10
ii. Publicidad y secreto sumarial	12
iii. Libertad de información y libertad de expresión	16
iv. Libertad de defensa	18
v. Presunción de inocencia	20
<b>3. JUICIOS PARALELOS Y VIOLENCIA SOBRE LA MUJER</b>	<b>23</b>
a) Introducción	23
b) Legislación actual y carencias	24
c) Necesaria formación especializada de los profesionales implicados en los procesos de violencia de género	27
<b>4. REDES SOCIALES y JUICIOS MEDIÁTICOS</b>	<b>34</b>
a) Posverdad y homogeneidad en las redes	34
b) Caso Ana Julia Quezada	38
c) Caso diana Quer	40
<b>5. POSIBLES SOLUCIONES</b>	<b>41</b>
a) Autorregulación de los medios de comunicación y deontología periodística	42
b) Formación especializada	43
c) Control de la actividad informativa de los Mass Media en casos penales	44
d) Ministerio Fiscal y medios de comunicación	46
<b>6. CONCLUSIÓN</b>	<b>48</b>
<b>7. BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>50</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo, se analizará un tema de candente actualidad como es los juicios paralelos y su influencia en el proceso penal. Se trata de un tema muy transversal ya que los juicios paralelos no afectan únicamente al mundo jurídico, sino que tienen repercusión en ámbitos sociales, políticos, legislativos... El desarrollo de las tecnologías y el mundo de la información han supuesto un grandísimo avance para nuestra sociedad y un cambio a la hora de recibir y proporcionar información de lo que sucede a nuestro alrededor. La rapidez y magnitud con las que se desarrollan y amplían las herramientas en los medios de comunicación entran, en determinadas ocasiones, en conflicto con la Administración de Justicia, más concretamente con los procedimientos penales. Conflictos a los que es difícil encontrar una solución realmente efectiva, pero que provocan muchos problemas; en este trabajo, nos centraremos en los que al mundo del Derecho se refieren. Es cierto que los juicios paralelos pueden considerarse un fenómeno “aislado” en el sentido de que son muy pocos casos y muy concretos los que dan lugar a los mismos; sin embargo, la repercusión es tal que merecen un análisis detallado y un esfuerzo por parte de la sociedad para intentar acabar con ellos.

Los medios de comunicación de masas han permitido el acceso a la información y a las noticias de actualidad a un público muy amplio, y de una manera muy inmediata; esto, junto a el surgimiento de las redes sociales, ha provocado que cualquier hecho noticiable llegue en cuestión de minutos a una gran cantidad de personas provocando reacciones en masa. En el caso de los procedimientos penales, provocan que estas reacciones sean mucho más pronunciadas que ante cualquier otro hecho y que la cobertura mediática a dichos hechos sea mucho mayor produciéndose los mencionados juicios paralelos. Estos torrentes de información son a menudo manipulados o exagerados para posicionar a la opinión pública en una determinada postura, normalmente con una carga ideológica detrás. Esto que ya de por sí es perjudicial respecto a cualquier hecho noticiable, es mucho más perjudicial respecto a casos penales puesto que se provoca, en ocasiones, una sensación de falsa inseguridad entre la población y una demanda de endurecimiento de las medidas punitivas, respaldada en ocasiones por sectores políticos con intereses electoralistas.

Además de todo esto, desde el punto de vista jurídico, a lo largo de este trabajo voy a analizar los derechos fundamentales, especialmente los del investigado, que sistemáticamente se ven vulnerados cuando estamos ante juicios paralelos. En particular, el conflicto existente entre el derecho a la información, y la libertad de expresión, así

como la garantía de publicidad procesal con el derecho de presunción de inocencia del investigado. Puesto que es habitual en estos juicios tan mediáticos que se produzca, debido a todas las informaciones, manipuladas, vertidas en los medios, una condena anticipada del investigado. Por otro lado, también viene siendo acostumbrado la vulneración del secreto de las actuaciones impuesto por el juez, las conocidas “filtraciones”, que a menudo proporcionan una información sesgada y poco realista del caso.

Veremos cómo, además, en los casos relativos a la violencia sobre la mujer estos efectos se ven multiplicados por la “especial protección” de la víctima, en estos casos el investigado prácticamente es condenado por la sociedad desde el minuto cero de la investigación y donde, además, se producen grandes movilizaciones de apoyo incondicional a la víctima. Algo que puede considerarse positivo, desde el punto de la implicación de la sociedad por la igualdad entre hombre y mujeres, pero que en el caso que nos atañe supone una absoluta lesión a la presunción de inocencia. Esto, sumado a la poca formación especializada en violencia de género de la que cuentan los órganos jurisdiccionales, es el perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de juicios paralelos.

Por otro lado, la revolución de las redes sociales ha multiplicado el efecto de los juicios paralelos, haciéndolos aún más incontrolables, puesto que las informaciones vertidas a la sociedad por los medios de información encuentran una reacción masiva en redes sociales como Twitter. En el que, desde detrás de un usuario, en ocasiones anónimo, se emiten todo tipo de opiniones e informaciones, mezclándose la verdad con la mentira, bajo la máxima de la libertad de expresión, un derecho que, aunque fundamental, no es absoluto, y que debe convivir con otros derechos recogidos en nuestra Carta Magna, como la intimidad, el honor o la propia imagen.

Por último, veremos algunas propuestas de soluciones para intentar suavizar los efectos de este difícil problema, que van desde una mayor autorregulación y autocontrol de los propios medios a la hora de publicar hechos noticiables sobre los que hay un procedimiento pendiente, como por una mayor colaboración entre la Administración de Justicia y los medios de comunicación en manos del Ministerio Fiscal. Así como, soluciones más agresivas como un control judicial respecto a las noticias sobre hechos relacionados con casos penales.

En este trabajo se ha pretendido realizar una recopilación acerca de los juicios paralelos y su influencia en el proceso penal, haciendo una especial referencia a los derechos fundamentales que garantizan un juicio justo y como se ven lesionados en mayor o menor

medida por el fenómeno de los juicios mediáticos. Prestando, también, particular atención a los casos de violencia sobre la mujer y analizando la formación real y efectiva de los órganos judiciales que se encargan de estos casos. Es decir, el objetivo principal de este estudio es aportar una síntesis actual del fenómeno de los juicios paralelos, para facilitar su comprensión e intentar encontrar las soluciones más adecuadas para evitarlos.

## **2. JUICIOS PARALELOS Y PROCESO PENAL**

### **a) Definición y doctrina**

Resulta pertinente, en primer lugar, dedicar unas líneas a definir qué es el derecho procesal penal y cuáles son sus características. El Derecho Procesal Penal, según García Perrote-Forn<sup>1</sup>, “está constituido por el conjunto de disposiciones legales que tienen por objeto la regulación de los procesos de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares” “su función fundamental es investigar, identificar y sancionar, cuando es pertinente, las conductas constitutivas de ilícito penal atendiendo a las circunstancias personales y particulares del caso concreto, preservando el orden social para lograr su objetivo de orden público”. Estas disposiciones legales a las que se refiere la autora están inspiradas en una serie de principios y valores que rigen nuestro Ordenamiento Jurídico, en particular, en nuestro derecho procesal penal; estos principios van dirigidos hacia la idea de equilibrio entre las garantías del investigado y la protección de las víctimas, entre la prevención general y especial y en definitiva entre la seguridad y libertad.

El Tribunal Constitucional, en adelante TC, en su labor interpretativa de nuestra Constitución, ha establecido en su doctrina los principios procesales rectores del proceso penal: el principio de contradicción, el principio de oralidad, el principio de inmediación y el principio de publicidad, del que haré un detenido análisis en las páginas siguientes. Una vez que esto está claro pasaré a analizar el concepto de juicio paralelo y sus múltiples interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales. Según Espín Templado<sup>2</sup>, se entiende por juicio paralelo “ el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto *sub iudice* a través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la regularidad legal y ética del

---

<sup>1</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 17.

<sup>2</sup> ESPÍN TEMPLADO, E., n° especial XIII, Revista Poder Judicial, CGPJ, 1990, Madrid p. 123.

comportamiento de personas implicadas en los hechos sometido a investigación judicial, Tal valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso, juicio paralelos en el que los diversos medios de comunicación ejercen los papeles de fiscal, abogado defensor, así como, muy frecuentemente, de juez”

Es innegable que los medios de comunicación cumplen un deber constitucional importantísimo como es el informar sobre sucesos de relevancia pública. Además, el deber de publicidad judicial, como garantía de juicio justo, convierte a los medios de comunicación en intermediarios entre la ciudadanía y el proceso judicial y, tienen gran importancia en la formación de la opinión pública. Así lo establece el periodista Cerdán Alenda<sup>3</sup> “la difusión de los acontecimientos judiciales, que son manifestación de acaecimientos sujetos a un poder del Estado, el Judicial, que emana de la soberanía nacional, adquiere una gran trascendencia como pieza esencial del sistema y la formación de la opinión individual y colectiva”

Como se puede observar, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad al respecto y el problema viene cuando las informaciones vertidas por estos medios de comunicación están completamente sesgadas o son informaciones muy poco contrastadas con contenido sensacionalista y morboso, que tienen como objetivo alcanzar los máximos índices de audiencia. Esto no quiere decir que haya, como dice Huertas Martín<sup>4</sup>, que “demonizar cualesquiera informaciones que ofrecen los medios” ya que como ella misma afirma el debate público sobre cuestiones judiciales resulta legítimo y es “incluso necesario en una sociedad democrática”.

Podría parecer que la solución este en limitar la libertad de información en la objetividad de la misma basándonos en las afirmaciones realizadas por el TC de que la información protegida por la CE es aquella que es veraz y relativa a asuntos de interés general. Sin embargo, esa veracidad no está ligada a que se trate de una información objetiva como así lo ha hecho entender el TC en varias sentencias (STC 1771/1990 de 12 de noviembre) Como establece la STC 6 / 1988, “(...)la libertad de prensa exige el reconocimiento de un espacio de inmunidad constitucionalmente protegido no solo para la libre circulación de noticias, sino para la libre circulación de ideas y de opiniones (...). Sería un límite constitucionalmente inaceptable, para la libertad de prensa, el impedir formular

---

<sup>3</sup> CERDÁN ALENDA, M. (2010): “El periodista ante el secreto del sumario”. *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, 2010, p. 287-299.

<sup>4</sup> HUERTAS MARTÍN, I. “Proceso penal y comunicación en el S.XXI: el inevitable juicio paralelo, el prescindible juicio paralelo show”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo blanch, Valencia, 2018, p. 432-433.



razonadamente conjeturas, que no pueden ser valoradas, como se ha dicho, desde la exigencia constitucional de la veracidad, sino como ejercicio de la libertad de opinión a partir de unos datos fácticos veraces” ya que el TC ha afirmado en su jurisprudencia que la veracidad a la que se refiere, únicamente exige que lo que se transmite como hechos “hayan sido objeto de previo contraste”.

A lo largo de los años, se ha ido elaborando una importante jurisprudencia y doctrina, por parte de los altos órganos judiciales, con respecto a los juicios paralelos y más concretamente, relacionada con la colisión del derecho de información, expresión y publicidad judicial con otros derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial y demás garantías que recoge el artículo 24 de nuestra Carta Magna. Voy a hacer una breve referencia al posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos humanos (TEDH), el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en adelante TS.

Con respecto a la doctrina del TEDH, este se refirió a los juicios paralelos en el caso “Sunday Times c. UK” en dicho caso, a pesar de que no se autorizó la prohibición por parte de la Cámara de los Lores de publicar un artículo en el periódico Sunday Times, se sentó una importante jurisprudencia, sentenciando lo siguiente: “si el público se habitúa al espectáculo de un pseudo-proceso en los medios de comunicación, puede darse a largo plazo consecuencias nefastas para el prestigio de los Tribunales, como órganos cualificados para conocer de los asuntos jurídicos.” (STEDH 26 abril de 1979)

Nuestro TC también se ha pronunciado numerosas veces sobre la influencia de los medios de comunicación en el proceso penal. Tras un análisis de diversas sentencias, se puede observar que el TC reconoce la posible influencia y afectación que puede tener la presión mediática en el desarrollo correcto del proceso penal y en el derecho a un juicio con todas las garantías. Sin embargo, es necesario como así lo expresa en la STC 69/2001 del 17 de marzo que existan sospechas objetivas y justificadas, que deben estar exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos. No vale con el punto de vista y el temor del litigante, ya que la imparcialidad del Tribunal es según el TEDH una presunción *iuris tantum*. Sin embargo, resulta evidente, lo difícil que puede ser demostrar ciertas presiones, o parcialidad de una manera objetiva. Aun así, ha habido varias sentencias en las que el TC ha limitado la libertad de información en aras del derecho a un juicio justo como en la STC 187/1999.

Por otro lado, el TS también reconoce en su doctrina que el clima social imperante como consecuencia de una campaña de prensa podía, en determinadas circunstancias, afectar al

desarrollo de un juicio con todas las garantías, y en cierto modo al derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, al igual que el TC, se exige poder acreditar de manera objetiva la supuesta vulneración de derecho. También, se ha pronunciado este tribunal en diversas sentencias acerca de la consideración de atenuante análoga el hecho de haber sufrido un juicio paralelo. Sin embargo, el TS establece que dicho juicio paralelo se considera un hecho extraño al mismo proceso penal y, que el afectado puede y debe ejercitar las oportunas acciones civiles o penales en otro proceso judicial.

En definitiva, en general nuestros altos órganos reconocen la existencia de los juicios paralelos y la afectación a determinados derechos, pero no dejan muy claro cuando dichas informaciones vertidas son influyentes para las partes del proceso o para el juez y, como se puede demostrar dicha influencia. Además, de darse, en general, pocas soluciones legales en el mismo proceso a la lesión de determinados derechos fundamentales.

#### **b) Derechos afectados e interpretación doctrinal**

En este apartado, pretendo analizar la colisión o afectación existente entre los mencionados juicios paralelos, es decir entre el derecho de información y expresión, y otros derechos fundamentales que garantizan el derecho a un juicio justo. Así como, realizar un análisis más detallado acerca de la publicidad procesal, su extensión y sus límites.

##### i. Derecho a un juez imparcial

El derecho a la imparcialidad judicial viene recogido en el mencionado artículo 24.2 de nuestra Constitución como una garantía indispensable para que estemos ante un juicio justo, y en el 6.1 de la CEDH cuando recoge el derecho de todo ciudadano a que su causa se oída por un Tribunal independiente e imparcial.

Dicho esto, el objetivo de este análisis es comprobar si dicha imparcialidad se ve lesionada por los definidos juicios paralelos. Para realizar un correcto análisis es importante, a mi parecer, hacer una referencia a la doctrina del TEDH que establece que el concepto de imparcialidad tiene dos vertientes, como así lo explica García-Perrote Forn<sup>5</sup>, “una de carácter subjetivo, que hace referencia a lo que el juez pensaba sobre el acusado, a la existencia de alguna animadversión; y otra vertiente de carácter objetivo que se dirige a comprobar si existen garantías suficientes que excluyan toda posible

---

<sup>5</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p.112

parcialidad. Es la llamada teoría de las apariencias”. Por tanto, es esta imparcialidad objetiva la que se discute si se ve afectada o presionada por la opinión pública y publicada. Algunos autores, como Quintero Olivares<sup>6</sup>, establecen “que los juicios paralelos pueden parecernos de mal gusto, desagradables, desinformadores, manipuladores de opinión, o buenos, interesantes y veraces. Pero sería absurdo sostener que un juicio paralelo turba la independencia, puesto que esta no tiene que sentirse perturbada por lo que se diga extramuros del proceso, salvo que, la jurisdicción esté a cargo de personas inadecuadas para ejercerla”. Posición similar es la adoptada por el TC, como indicamos en las sentencias mencionadas anteriormente, ya que este reconoce la colisión existente entre los juicios paralelos y ciertos derechos fundamentales, pero se muestra reacio a reconocer una verdadera influencia mediática en las decisiones asumidas por los altos cargos, y exige demostrar con datos objetivos el posible menoscabo, no siendo suficiente la mera percepción o sensación del acusado (STC 136/1999 de 20 de julio). Y en el caso de que haya una probabilidad fundada de esta influencia el TC, siguiendo la jurisprudencia marcada por el TEDH en el “Caso Worm”, justifica ciertas restricciones a la libertad de expresión.

Por tanto, vemos cómo, aunque la percepción social puede tener la sensación de parcialidad, la realidad judicial es distinta, rompiéndose, en ciertas ocasiones, la referida apariencia y confianza en los organismos judiciales. Además, debemos recordar que el propio sistema judicial tiene instrumentos suficientes que actúan cuando hay sospechas acerca de la imparcialidad del juez, apartándolo de la causa, como son la recusación, solicitada por las partes cuando no confían en la imparcialidad del juez, o la abstención cuando es el propio juez quien decide apartarse. Si es cierto que, en las causas, perfectamente contempladas en la ley, que permiten utilizar estos instrumentos no aparece de forma expresa la situación que venimos comentando, y a mi parecer podría ser una buena idea para recuperar la apariencia y confianza social que en ocasiones se pierde.

Desde mi punto de vista, es evidente que la existencia de juicios paralelos afecta al desarrollo normal del proceso, pero no creo que haya una injerencia directa entre la presión mediática y la opinión pública y la sentencia finalmente dictada por los órganos jurisdiccionales; puesto que esto sería reconocer que el propio sistema judicial es defectuoso, y que los derechos fundamentales y garantías de nuestro Ordenamiento

---

<sup>6</sup> QUINTERO OLIVARES, G., “Libertad de prensa y protección de la independencia e imparcialidad judicial” *Revista del poder Judicial n1 especial XVIII*, CGPJ, Madrid, p. 352.

Jurídico serían un fraude, “sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso jurisdiccional” (v.gr, STC 60/1995). Por tanto, debemos confiar, como afirma Huertas Martín<sup>7</sup>, que “el juzgador, por su singular formación y posición- órgano independiente, imparcial, predeterminado por la ley, y sometido únicamente al imperio de esta-ha de encontrarse al abrigo de tales influencias”.

## ii. Publicidad y secreto sumarial

La publicidad como principio rector del proceso penal y del ordenamiento jurídico general está presente en múltiples textos legales, nacionales e internacionales, además, de haber sido objeto de bastantes interpretaciones doctrinales.

En primer lugar, la Constitución española (en adelante CE) se refiere a la publicidad procesal de manera expresa en su artículo 24.2<sup>8</sup>, cuando reconoce el derecho a tener “*un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías*”. Debemos recordar, además, que este derecho se incluye dentro de nuestros derechos fundamentales por lo que tiene unas garantías y protección reforzadas al resto de derechos recogidos en la CE, como la de poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de vulneración. Nuestra carta Magna también se refiere a la publicidad procesal en el artículo 120.1 en donde se establece “*1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procesamiento*”. Este artículo nos señala, ya, que este principio de publicidad no es absoluto en nuestro Ordenamiento Jurídico, y que va a tener una serie de excepciones legislativas que iré analizando en este apartado.

Esta mención expresa a la publicidad procesal que recoge nuestra Constitución, va de la mano con lo dispuesto en los Tratados Internacionales en materia de derechos fundamentales que completan también nuestro Ordenamiento Jurídico. Como por ejemplo, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 que establece que “*(...)conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías para su defensa*”; El Convenio de Roma de 4 noviembre de 1950 para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que establece en su artículo 6 “*Toda persona tendrá derecho a ser oída*

---

<sup>7</sup> HUERTAS MARTÍN, I. “Proceso penal y comunicación en el S.XXI: el inevitable juicio paralelo, el prescindible juicio paralelo show”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 422

<sup>8</sup> Artículo 24. 2 CE: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.”

*públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente...*”; así como en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, Nueva York 19 de diciembre 1966.

Queda patente la gran importancia y protección de este principio de publicidad procesal, pero, como he mencionado anteriormente, no se trata de un principio que tenga carácter absoluto y que prevalezca sobre todos los demás, ya que en muchas ocasiones colisiona con otros Derechos Fundamentales de nuestro Ordenamiento Jurídico, y es aquí donde debe ponderarse el interés jurídico protegido y las circunstancias en cada caso concreto. Serán las disposiciones legales junto a una abundante jurisprudencia las que determinarán la extensión y los límites de este principio.

A nivel general, encontramos en nuestro sistema jurídico dichos preceptos legales que constituyen las excepciones al derecho a juicio público. En primer lugar, nos encontramos el artículo 232.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo apartado primero es una reproducción exacta del artículo 120.1 de la CE, y su apartado tres nos indica que *“que excepcionalmente por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de toda o parte de las actuaciones”*. Otra de las excepciones más importantes y controvertidas, nos la podemos encontrar en los artículos 301.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECrim, que establece que *“las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”*. El artículo 302 de la LECrim dispone, sin embargo, que las partes podrán conocer de las diligencias e intervenir en ellas, pero en el apartado dos de este mismo artículo se admite una excepción a lo anterior, estableciendo que a discrecionalidad del juez, y para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona o para prevenir una situación que pueda comprometer el resultado de la investigación, se podrá declarar el sumario del delito público parcialmente secreto para las partes.

Para poder seguir analizando este tema, creo que es importante hacer referencia a la división de la publicidad procesal por niveles que establece García-Perrote Forn<sup>9</sup> “el primer nivel de publicidad es el interno y afecta a las partes. Es el nivel *intraprocesum* y forma parte del derecho de defensa y del derecho a conocer el contenido de las actuaciones judiciales. (...) El segundo nivel es la publicidad frente a terceros como

---

<sup>9</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., *“Los juicios paralelos”*, Atelier, Barcelona, 2017, p.27

espectadores en la realización de las actuaciones (...). El tercer nivel es la publicidad en el proceso penal en un plano extraprocesal. Es la publicidad *extraprocesum*. Esta se relaciona con el derecho fundamental de libertad de información y se concreta en la difusión de noticias judiciales en los medios de comunicación”

Como podemos observar, las excepciones a la publicidad procesal marcan límites sobre todo a nivel interno, es decir, podemos hablar de derechos procesales internos; sin embargo, vemos pocas o casi ninguna referencia en los preceptos legales a la publicidad *extraprocesum*, lo que puede provocar, en palabras de García Perrote Forn<sup>10</sup>, “situaciones paradójicas como son la existencia de un férreo secreto sumarial para los propios interesados y una completa difusión de las noticias en los Mass Media”

Para hacer un análisis más claro voy a comentar de manera más concreta los límites de la publicidad en las dos primeras fases del proceso penal: la fase de instrucción y la fase del juicio oral.

Con respecto a la fase de instrucción, tenemos que volver al mencionado artículo 301.1 de la LECrim, donde se establece el secreto genérico de las diligencias de instrucción amparándose constitucionalmente en el artículo 120 de la CE. La STC 13/1985 se pronuncia sobre esta premisa del secreto sumarial y sobre cómo y a quién afecta; establece en sus Fundamento Jurídico, apartado 3º “(...) la regulación legal del secreto sumarial no se interpone como un límite frente a la libertad de información, sino más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento por cualquiera”, justificando la sentencia que esta limitación es necesaria para “una segura represión del delito”. Por tanto, como podemos ver tanto los preceptos legales como la jurisprudencia posterior, justifican la limitación del derecho de información en aras a la seguridad general. Sin embargo, en esta misma sentencia se establece, también, que el secreto no es absoluto, sino que lo que realmente limita el artículo 301 de la LECrim son las revelaciones indebidas, la obtención ilícita de la información, y aclara que dicho secreto recae sobre las actuaciones del órgano judicial que constituyen el sumario, no sobre los hechos mismos que se investigan, respetando, así, el principio de publicidad procesal.

El secreto sumarial recae por tanto en los intervinientes en el proceso contemplándose en sus diferentes estatutos sanciones y responsabilidad en caso de incumplimiento. Sin embargo, según García-Perrote Forn<sup>11</sup> “no se aplica el mismo criterio respecto de otros

---

<sup>10</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p.29

<sup>11</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 55.

intervinientes como el investigado, la víctima, los testigos, los peritos y el intérprete. (...) no suele ser extraño que estas personas den a conocer la causa a un medio periodístico y este a su vez lo integre en la noticia”. Además, debemos recordar que los artículos 234 y 235 de la LOPJ establecen que los funcionarios y el Letrado de la Administración de Justicia deberán proporcionar a los interesados cuanta información soliciten sobre las actuaciones judiciales, y la falta de prohibición específica a dichos interesados de difundir o publicar estas actuaciones a los medios de comunicación, alimentado, todo lo mencionado, al juicio paralelo.

Me gustaría hacer también una breve referencia a las limitaciones de la publicidad procesal en la fase del juicio oral. La publicidad en esta fase procesal viene recogida en el artículo 680 de la LECrim, que establece que los juicios orales serán públicos sin perjuicio de lo expuesto en el artículo siguiente, es decir, que aquí, a diferencia de la fase de instrucción, partimos de la premisa de la publicidad general. Sin embargo, como ya nos adelanta el artículo, vamos a tener una serie de excepciones a este principio general. En primer lugar, el artículo 681 que nos establece la posibilidad de celebración del juicio a puerta cerrada por razones de orden público, seguridad o protección de derechos fundamentales. En segundo lugar, en el artículo 682 de este mismo cuerpo legal, se recoge la posibilidad de restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales y la prohibición de grabar sonido, imágenes o facilitar la identidad de las partes, por razones de protección hacia la víctima, y para permitir el correcto desarrollo del proceso.

Me parece interesante destacar la distinción que hace García-Perrote Forn<sup>12</sup> entre “publicidad inmediata”, que “supone tan solo la presencia física del público en la Sala”, y “publicidad mediata”, que “consiste en la presencia de los medios de comunicación en la sala de vistas.”. Como podemos ver, la limitación prevista en el 681 de la LECrim no lesiona en sí el derecho de publicidad e información, ya que como bien ha reconocido el TC en distintas sentencias los periodistas gozan, a la hora de asistir a juicios, “de un derecho preferente atribuido en virtud de la función que cumplen en aras del deber de información constitucionalmente garantizado” (STC 30/1982). Es por tanto en la limitación recogida en el 682 de la LECrim donde hay una verdadera restricción del derecho de información al no permitirse la utilización de medios técnicos para la difusión de la noticia. Esto es así en palabras de García Perrote-Forn<sup>13</sup> porque “el acto en sí mismo

---

<sup>12</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 61.

<sup>13</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p 63.

de la grabación televisiva no se trata de un acto neutral, sino de un acto de influencia - involuntaria- sobre los intervinientes”. Para entender los límites de esta prohibición la jurisprudencia se ha pronunciado en varias ocasiones, pareciendo que la tendencia actual del TC, que modifica su interpretación anterior, acerca del acceso de medios de captación y difusión de imágenes a las audiencias públicas es la de “una habilitación general con reserva de prohibición” (STC 56/2004), ya que “la utilización de tales medios forma parte del ámbito constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad de información que no ha sido limitado con carácter general por el legislador”.

### iii. Libertad de información y libertad de expresión

Me parece adecuado empezar este apartado con una cita a Aragón Reyes<sup>14</sup> que establece que una democracia únicamente es sólida “cuando el interés por las cosas públicas no solo se manifiesta y transcurre en los ámbitos del Derecho y de las instituciones sino también en el más amplio, difuso y cotidiano de la propia sociedad”

La libertad de expresión y de información son una de las bases de las sociedades democráticas, no podemos entender el Estado de Derecho sin la consagración constitucional de estos derechos. En nuestra Carta Magna, la libertad de información y expresión viene regulada en el artículo 20. Por un lado, se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier medio de reproducción; y por otro lado, se protege y defiende el derecho de información con una doble vertiente, el derecho a informar y a ser informados. Además, la libertad de información, como hemos visto en el apartado anterior, va de la mano con el principio de publicidad procesal.

En palabras de Reifarth Muñoz<sup>15</sup> “la publicidad de las acciones del foro constituye uno de los mejores y más eficaces remedios contra la arbitrariedad de forma que se permite a los ciudadanos el control de las decisiones de los órganos de justicia y se fortalece la legitimidad social- o mejor aún, de ejercicio- de estos últimos”. Por tanto, la publicidad procesal unida a la libertad de información y expresión muestran, en último término, la democratización de la justicia, pasando de un proceso secreto e inquisitivo a un proceso público y democrático, y en este paso han jugado y juegan un papel fundamental los

---

<sup>14</sup> ARAGÓN REYES, M., “Independencia judicial y libertad de expresión” *Derecho Privado y Constitución* nº10, 1996.

<sup>15</sup> REIFARTH MUÑOZ W., “Inulto l’atroce insulto?: imparcialidad judicial y libertades de expresión e información” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 348.



medios de comunicación sirviendo de “puente de unión entre la decisión judicial y el pueblo”<sup>16</sup>

Sin embargo, hay cierta información vertida por los Mass Media que, como vamos viendo, entra en colisión con ciertos derechos fundamentales, y no debemos olvidar que es el propio artículo 20.4 que establece que estas libertades tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la CE. Lo preocupante ha sido la irrupción en este terreno informativo de algunos programas de televisión de la llamada “crónica roja” que no responden al interés político o social, sino que han desfigurado el interés informativo. Podemos observar esa aparición en casos muy relevantes como el muy mediático caso de las niñas de Alcàsser.

Por tanto, los medios de comunicación se enfrentan a la disyuntiva de, o bien, utilizar información veraz y hacer prestar un servicio responsable a la sociedad, que incentive el debate público y el interés por los asuntos judiciales desde el respeto a las garantías jurisdiccionales y en colaboración con los órganos judiciales, o si por el contrario, priorizan por encima de todo los niveles de audiencia, y optan por dar un servicio cargado de morbo y especulación convirtiendo el proceso judicial en un “espectáculo mediático” sin ninguna clase de freno ético.

Por otro lado, hay posturas dentro del mundo del periodismo que consideran que los juicios paralelos no son creados por los medios de comunicación, sino por las fuentes que son normalmente las partes del proceso, y que deciden según les convenga qué información proporcionar y cuál no, como parte de su estrategia de defensa que veremos en las páginas siguientes. Esta es la postura de periodistas como Xavier Gil o Ana María Ovejero<sup>17</sup>, que también achaca el problema a las filtraciones declarando que “una filtración no ofrece todo el conjunto probatorio, sino solamente determinadas partes del conjunto, y eso hace que te puedes inclinar a pensar que esa es la única prueba que existe sin contrarrestar”.

Volvemos aquí al tema de las filtraciones, donde se produce una gran paradoja, ya que, por un lado, no debemos olvidar que la mayoría de las filtraciones son consecuencia de un quebrantamiento del secreto de sumario, pero por otro, la Constitución española en el

---

<sup>16</sup> VEGA RUIZ, J.A., “*Libertad de expresión, información veraz, juicios paralelos y medios de comunicación*”, Universitas, Madrid, 1998, p.61.

<sup>17</sup> Declaraciones realizadas en el artículo “Los juicios paralelos: entre la libertad de información y los peligros de convertirse en un juez mediático”, *Diario Jurídico*, 2012. Retrieved from <https://www.diariojuridico.com/los-juicios-paralelos-entre-la-libertad-de-informacion-y-los-peligros-de-convertirse-en-juez/>

mismo artículo 20 reconoce a los profesionales de la comunicación el derecho a no revelar sus fuentes, el conocido secreto profesional.

Estas filtraciones nos pueden hacer pensar, como opinan muchos periodistas, que el problema tiene su raíz en la longitud del secreto sumarial y la poca información oficial por parte de los organismos judiciales, que hace que los periodistas tengan que realizar investigaciones en paralelo<sup>18</sup>. Otras posturas, optan, sin embargo, por el endurecimiento de ese secreto sumarial mediante sanciones y responsabilidades en caso de incumplimiento, a cambio de proporcionar una comunicación más directa entre los órganos judiciales, en concreto entre Ministerio Fiscal y los Mass Media. Estas posibles soluciones las analizaré con más detenimiento en el último punto.

#### iv. Libertad de defensa

Me gustaría hacer una breve referencia al derecho de defensa y al derecho a la libertad de defensa y su relación con el tema que nos concierne. El derecho a la defensa es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, que, entre otras garantías que hemos ido analizando, asegura el derecho a un juicio justo. Este derecho a la defensa lleva aparejado, indiscutiblemente, el derecho a la libertad de defensa y a la libertad de expresión. El primero se halla recogido en el preámbulo de su Código Deontológico o el artículo 33 del Estatuto General de la Abogacía, y permite al abogado realizar su estrategia como así estime oportuno, respetando, claro está, la ley y las normas deontológicas. En palabras de San Miguel Caso<sup>19</sup>, “el abogado defensor dispone de un amplio abanico de posibilidades que le permitirán escoger la estrategia de defensa que considere óptima para lograr un resultado satisfactorio y acorde a las pretensiones de su patrocinado”. Lo que analizaremos en este apartado es si, dentro de dicho abanico, deberíamos incluir ética y legalmente la defensa mediática, y si dicha intervención de los abogados en los medios de comunicación propicia o genera un juicio paralelo, como opinan muchos periodistas, o si, por el contrario, fortalece los derechos de presunción de inocencia y de defensa de su patrocinado ante la posible condena mediática anticipada. En primer lugar, el actual Código Deontológico de la Abogacía Española no recoge ninguna norma relativa a la relación entre los abogados y los medios de comunicación; a diferencia de este mismo Código en 1995 en el cual se recomendaba a los abogados

---

<sup>18</sup> De este parecer se muestra Ana María Ovejero, en el medio antes citado.

<sup>19</sup> SAN MIGUEL CASO, C., “La cobertura mediática en el sistema de la estrategia de la defensa penal”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 359

abstenerse de poner en antecedentes a los medios de comunicación, para evitar orientar la opinión pública en interés propio. Por tanto, al haber un vacío normativo, entendemos que la intervención mediática como estrategia de defensa no está sancionada ni limitada en aras a la libertad de defensa.

Hay dos características del ejercicio del abogado que debemos destacar para entender mejor este análisis. Una es la parcialidad como carácter inherente a la correcta consecución del derecho fundamental de defensa. El abogado está obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquel, premisa establecida en el artículo 4.2 del Código Deontológico de la Abogacía Española. Por tanto, debemos partir de que toda o casi toda información vertida en los medios de comunicación por el abogado va a ser una información parcial, encaminada a favorecer a su defendido, como no puede ser de otra manera. No obstante, como afirma Calamandrei<sup>20</sup>, “esta parcialidad no debe llevar a permitir que el abogado use el engaño o la mentira como táctica”. La segunda característica, que me gustaría destacar, es el derecho a la libertad de expresión reforzada que tiene el abogado en el ejercicio de su oficio, que explica muy bien San Miguel Caso<sup>21</sup> “es una libertad cualificada reconocida en el ejercicio de una profesión determinada, la cual, ha sido objeto de un constante y progresivo desarrollo jurisprudencial(...)estaría justificado un mayor margen de discrecionalidad en su aplicación, ya que sería una libertad de carácter legal y no constitucional, orientada, en todo caso, a la efectividad de un derecho fundamental”. Aquí, lo que debemos valorar es si esta libertad de expresión cualificada protege las intervenciones del abogado con los Mass Media, es decir, un uso extrajudicial de dicha libertad. La doctrina del TEDH parece afirmar que sí, como recoge el artículo 10 del CEDH, que establece que, por encima de ideas e informaciones expresadas, este artículo, también, protege su modo de expresión (STEDH Caso Mur contra Francia).

En general, todo parece indicar que, en principio, no habría ningún problema en la intervención mediática del abogado como estrategia defensiva; incluso la mencionada San Miguel Caso va más allá afirmando que se trata de una estrategia con la finalidad de proteger el derecho a la defensa en su vertiente extraprocesal, reducir la estigmatización

---

<sup>20</sup> CALAMANDREI, P., “*Demasiados abogados*” Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, p. 97.

<sup>21</sup> SAN MIGUEL CASO, C., “La cobertura mediática en el sistema de la estrategia de la defensa penal”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 366

del sujeto, y tratar de contrarrestar los efectos peyorativos de los juicios paralelos<sup>22</sup>. Sin embargo, aunque, me parece una conclusión muy acertada la de la profesora San Miguel, no podemos olvidar la evidencia de que las temidas “filtraciones”, en muchas ocasiones, provienen de las partes que usan la información reservada de la que disponen en su interés, quebrantando el sabido secreto sumarial (301.1 LECrim). Estaríamos, por tanto, ante una intervención indirecta e ilegítima de los Letrados, que, como sabemos, está sancionada penalmente, pero que rara vez despliega sus efectos, al ser casi imposible identificar al autor de dichas filtraciones debido al “secreto profesional” del periodista.

#### v. Presunción de inocencia

La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 24.2 de la Constitución española. La presunción de inocencia significa, en palabras de Prat Westerlindh<sup>23</sup>, que “en ausencia de pruebas de cargo, no se puede adoptar una resolución judicial en contra de una persona que aparece indiciariamente como responsable de un hecho”. Lo que aquí se va a analizar es si esa presunción de inocencia se limita únicamente al estricto procedimiento jurídico, o si por el contrario también tiene una vertiente extraprocesal. Es decir, si dicho derecho puede verse lesionado por las informaciones vertidas por los medios de comunicación durante el proceso, en definitiva, por los juicios paralelos, o si este derecho únicamente se puede lesionar en el propio proceso judicial.

En sentido jurídico propio, la presunción de inocencia, en palabras de Varela Castro<sup>24</sup>, “permanece incólume sea cual sea el contenido informativo sobre el proceso en curso, pues lo garantizado son los derechos del imputado frente al legislador y el juez, y no frente al público”. Es decir, esta presunción de inocencia *stricto sensu* declara que la difusión informativa desplegada por particulares no puede lesionar dicho principio, y que son, únicamente, los intervinientes del proceso penal encargados de enjuiciar los que pueden vulnerar este derecho fundamental.

Por otro lado, tenemos la postura que afirma que la presunción de inocencia tiene una vertiente extraprocesal, que puede ser lesionada por particulares, los medios de

---

<sup>22</sup> En este sentido, SAN MIGUEL CASO C., La cobertura mediática en el sistema de la estrategia de la defensa penal”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 373

<sup>23</sup> PRAT WESTERLINDH, C., “Relaciones entre poder judicial y los medios de comunicación”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 223.

<sup>24</sup> VARELA CASTRO, L., “Proceso penal y publicidad”. *Jueces para la Democracia*, n.º 11, 1990, p.38.

comunicación lo son, teniendo en cuenta que estos, como formadores de la opinión pública, tienen una grandísima influencia sobre el sentimiento popular y la consideración pública de inocencia de una persona. Como bien explica Huertas Martín<sup>25</sup>, “la sociedad puede verse negativamente influida por los medios de comunicación, generando así un fallo que puede persistir de manera indefinida en la mentalidad colectiva sin tener en cuenta el sentido de la resolución judicial, lo que obviamente puede repercutir en la vida cotidiana de la persona antes imputada”. Esta postura viene a defender que la persona acusada tiene derecho a ser tratada como inocente, pero, no solo ante los órganos jurisdiccionales, sino ante la sociedad. Esta es la línea más aceptada actualmente y la seguida jurisprudencialmente tanto por el TC y como por el TEDH.

El TC ha reconocido la existencia de, lo que él mismo denomina, un derecho de presunción de inocencia “impropia”, en numerosas sentencias como STC 109/1986, 129/1995 y 166/1995, es decir, ha reconocido dicha vertiente extraprocesal. Sin embargo, afirma que este derecho encuentra su protección a través de la tutela del derecho al honor, como instrumento de defensa ante informaciones periodísticas que producen una condena previa del acusado, desvinculándose del derecho constitucional propiamente dicho. El derecho al honor es tutelado civil y penalmente, y para demostrar que ha habido efectivamente una lesión a dicho derecho hay que demostrar, en primer lugar, que ha habido un menoscabo en la fama de la persona, y, en segundo lugar, que no se ha cumplido con el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información. Lógicamente, para la imposición de la condena penal se exigirá un estándar más estricto y por lo tanto más permisivo con la libertad de información<sup>26</sup>. Sin embargo, hay ocasiones en las que la presunción de inocencia resulta afectada y no necesariamente tiene que haber una noticia falsa, basta con dar la noticia de una manera sesgada, manipulada, o utilizando determinado vocabulario y titulares para que la opinión pública condene, de manera anticipada, al acusado. En estos casos, tendríamos una lesión en la presunción de inocencia que no estaría tutelada por el derecho al honor. Además, no debemos olvidar que para ejercer acciones penales por injurias y calumnias es necesario la interposición de una querrela, y que el afectado se persone como parte. Por lo que estamos dejando en este caso la tutela penal en manos del afectado.

---

<sup>25</sup> HUERTAS MARTÍN, I. “Proceso penal y comunicación en el S.XXI: el inevitable juicio paralelo, el prescindible juicio paralelo show”, Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 415

<sup>26</sup> De acuerdo con GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 115.

El TEDH también ha reconocido la presunción de inocencia impropia estableciendo que este derecho puede verse afectado por declaraciones públicas de culpabilidad, aunque estas no provengan de los órganos jurisdiccionales, y exige que ningún representante del Estado, o de la autoridad pública declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal<sup>27</sup>. Además, en esta línea los órganos europeos adoptaron la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, cuyo objetivo es reforzar las garantías esenciales del proceso penal. Esta Directiva establece que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad del sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable”. Es decir, medidas tendentes a evitar la condena anticipada del acusado en la sociedad.

En definitiva, con todo lo expuesto, queda patente el reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia fuera del ámbito estrictamente jurídico y la afirmación de que este se puede ver afectado por los juicios paralelos. El problema surge en que no hay una tutela específica para la lesión de dicho derecho por los medios de comunicación, remitiendo el TC a la tutela civil o penal del derecho al honor. Una tutela que, a mis ojos, es insuficiente, puesto que como afirma García-Perrote Forn<sup>28</sup> “al considerarse solamente el honor del inculcado o víctima, se está prescindiendo de la dimensión pública e institucional que intenta proteger el proceso judicial, a los jueces y a las demás personas que intervienen en el mismo (...) El juicio paralelo utiliza y cuestiona el honor pero no se dirige hacia él de forma exclusiva, puede incluso no dar noticias falsas pero si darlas de forma manipulada de tal forma que , según el contexto y la forma en la que se difunden, implicarán una previa condena social del acusado” . En definitiva, la tutela del derecho al honor no es efectiva a la hora de evitar la afectación de los derechos fundamentales en los juicios paralelos.

---

<sup>27</sup> Cfr. SSTEDH Kamasinskic. Austria, 19 de diciembre de 1989, § 62, serie A no 168 Allenet de Ribemont c. Francia, 10 de febrero de 1995, §§ 35-36, serie A no 308; Viorel Burzo c. Rumania, nos 75109/01 y 12639/02, § 156, 30

<sup>28</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 117.

### 3. JUICIOS PARALELOS Y VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Hasta el momento, nos hemos centrado en analizar la relación, conflictiva, existente entre los juicios paralelos y determinados derechos fundamentales que garantizan el derecho a un juicio justo. En este apartado, sin embargo, nos alejaremos de conceptos tan puramente jurídicos para adentrarnos en el estudio de los juicios paralelos en el seno de la violencia sobre la mujer, así como hacer un breve repaso de la evolución legislativa sobre esta materia en nuestro país y las carencias y mejoras necesarias para acabar con esta lacra social, así como para mitigar la incidencia de los juicios paralelos que es especialmente notable en estos casos.

#### a) Introducción

La mediatización de la justicia, los conocidos juicios paralelos y el desprecio a las garantías procesales, más concretamente a la presunción de inocencia, se agrava enormemente cuando estamos ante casos de violencia sobre la mujer. En un contexto donde el movimiento feminista y la lucha contra la desigualdad, afortunadamente, está en auge, se ha vuelto algo habitual las grandes movilizaciones de mujeres apoyando a la víctima y condenando al agresor mucho antes de su condena judicial o incluso estas mismas movilizaciones cuando finalmente la sentencia no es la esperada o no es lo “suficientemente dura” a ojos de la población. En palabras de Carrizo González-Castell<sup>29</sup> “dicho tratamiento otorga total protagonismo a la víctima, que centra la noticia y la información en detrimento del delincuente, al que con frecuencia se le deshumaniza, incluso con la utilización de alias”. Esto tiene entre otras consecuencias la percepción pública, alentada por los medios de comunicación, de que en ocasiones la condena sentenciada no es suficiente, exigiéndose inmediatas reformas en las disposiciones legales y poniéndose en entredicho, incluso entre miembros del Gobierno, la actuación judicial. Es lo que se conoce como populismo punitivo.

En este punto me centraré en analizar el desarrollo legislativo sobre esta materia en España, así como las carencias actuales que provocan en determinadas ocasiones sentencias en las que la perspectiva de género es inexistente. Por último, la necesidad de suplir estas carencias para una mejora de la calidad de la justicia en general y para una

---

<sup>29</sup> CARRIZO GONZÁLEZ CASTELL, A., “Juicios paralelos y violencia sobre la mujer: de la posible influencia del “yo si te creo” en las decisiones judiciales”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 458.

mayor especialización en casos tan delicados como los de la violencia sobre la mujer. Estudiaré cómo la formación especializada de los profesionales implicados en estos procesos es la clave para, entre otras cosas, mitigar los efectos de los juicios paralelos, y para conseguir una sociedad más justa e igual.

#### **b) Legislación actual y carencias**

Para iniciar el recorrido cronológico por nuestra legislación en materia de violencia sobre la mujer, debemos empezar por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley pionera en Europa define en su artículo 1.1 lo que se va a considerar Violencia de género “aquella violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” es decir, establece muy claramente el límite de que para que se considere violencia de género tiene que haber una relación de afectividad entre las partes. Por otro lado, esta ley define en su artículo 1.3 el tipo de violencia a la que se refiere “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. La ley 1/2004 marca un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en nuestro país; la norma trajo consigo la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir y visibilizar el maltrato, en todos los ámbitos, laboral, social, sanitario, educativo....

A nivel jurídico hubo importantes cambios en materia penal introduciendo en el Código Penal ciertas modificaciones como cambios terminológicos para recoger la figura específica de “violencia de género” así como el agravamiento de tipos penales cuando la víctima cumplía los requisitos antes mencionados, etc. y sobre todo en cuestiones procesales con la creación de unos juzgados con competencias territoriales y objetivas específicas como los “Juzgados de violencia sobre la mujer”, así como la creación de la figura de un Fiscal contra la violencia sobre la mujer. En principio, estos juzgados se situarán en las capitales de provincia teniendo jurisdicción en todo su territorio y teniendo competencia en el orden civil y penal. Aquí nos centraremos en el ámbito penal, este juzgado conocerá de la instrucción de los procesos por delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delito contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual o cualquier delito cometido con violencia o



intimidación, delitos contra los derechos y deberes familiares, siempre que el sujeto pasivo sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, sobre los menores o incapaces que con él conviven o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento, o guarda de hecho de la esposa o conviviente; de la adopción de las órdenes de protección, sin perjuicio de la competencia del Juez de Guardia; de la instrucción y fallo de las faltas contenidas en los Títulos I y II del Libro III del Código Penal (contra las personas y contra el patrimonio), cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas con anterioridad. (Art 87 ter LOPJ). Estos juzgados además recibirán una formación especializada respecto a la violencia sobre la mujer que desarrollaremos en el último apartado.

A nivel institucional, se crea la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, y El Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer, adscritos ambos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, se crean en el año 2008 dos Comisiones de Igualdad independientes, una en el seno del Congreso de los Diputados y otra en el Senado para el seguimiento de las actuaciones del Gobierno en materia de igualdad, así como velar por su aplicación y realizar un continuo análisis de la sociedad española sobre esta materia.

Este gran despertar de los Estados en la implementación de medidas contra la violencia de género tiene como consecuencia que, años después, se desarrolle el primer instrumento vinculante a nivel europeo en materia de violencia sobre la mujer: el Convenio de Estambul que entra en vigor en España el 1 de agosto de 2014. Dicho convenio tiene como fundamento prevenir y proteger a las víctimas, la coordinación de los organismos oficiales pertinentes, así como la sensibilización y formación de la sociedad en esta materia; algo muy parecido a lo que recoge la ley 1/2004 contra la Violencia de Género. Sin embargo, la gran diferencia viene en el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul que define en su artículo 3.1 lo que se considera violencia sobre la mujer, se deberá entender como “una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada” El Convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital

femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto implica que los Estados deberán introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos. Se observa por tanto que, en dicho convenio, no se requiere que exista con el agresor ningún tipo de relación como si se establecía en la LO 1/2004.

Siguiendo con este recorrido legislativo en nuestro país, llegamos a septiembre de 2017 fecha en la que se aprueba en España el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un Pacto de Estado es la denominación que se da a los pactos entre partidos políticos de tendencias opuestas para enmarcar la acción del Estado a largo plazo en asuntos de trascendencia, sin importar qué partido ocupe el gobierno en cada momento<sup>30</sup>. Se trata de un pacto en el que se recogen 292 medidas que pretende incidir en todos los ámbitos de la sociedad con el objetivo de suplir carencias y perfeccionar medidas para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer; se pretende garantizar que este sistema siga avanzando independientemente del partido que se encuentre en el gobierno. Este pacto tiene como ejes principales: acciones de sensibilización de la sociedad, mejora de la respuesta institucional, perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección de las víctimas y de sus hijos, impulso a la formación de los distintos agentes para garantizar la mayor protección asistencial, el seguimiento estadístico de todos los tipos de violencia, compromiso económico con el Pacto, Comisión de seguimiento del pacto de Estado, la visualización y atención de las formas de violencia de género fuera del contexto de pareja o ex pareja y recomendaciones a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras instituciones, como agentes colaboradores.

Como vemos este pacto va más en la línea del Convenio de Estambul, haciendo incidencia en todo tipo de violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el aborto forzado y la esterilización forzada contra la mujer independientemente de la relación que tenga esta con el sujeto activo. Recogiendo incluso entre sus propuestas de actuación la ampliación del concepto de violencia de género, para incluir los preceptos antes mencionados del Convenio de Estambul. Entre las propuestas de dicho pacto se

---

<sup>30</sup> Así lo define el propio folleto del Pacto. Retrieved from <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/home.htm>

incluye también, como bien recoge Carrizo González-Castell<sup>31</sup>, la de “aplicar el art. 22.4 CP en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer o por razones de género en diferentes supuestos, tales como los casos de agresión sexual y abuso sexual”. Por otro lado, el Pacto recoge un mandato para el legislador en relación a la protección y recuperación de todas las mujeres víctimas que no estén recogidas en la Ley 1/2004, es decir aquellas víctimas que no tienen ni han tenido con su agresor ningún tipo de relación de afectividad, así como de todos los tipos de violencia recogidos en el Convenio de Estambul. Este mandato expreso, en palabras de Carrizo González-Castell<sup>32</sup>, “supone que deberá abordarse la protección integral de las mujeres víctimas de violencia, bien elaborando nuevas leyes, que determinen el tratamiento procesal que debe darse a las víctimas de los otros tipos de violencia que ahora también pasan a ser considerados como violencia de género, o bien reformando leyes ya existentes”. Esto permitiría que los Juzgados específicos de violencia sobre la mujer tuvieran competencia y actuarán en aquellos casos donde se produce una agresión sexual, abuso... en los que la víctima fuera una mujer, aun sin tener relación de afectividad. Es decir, que algunos de los casos polémicos de actualidad, fueran instruidos y juzgados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y no por un Juzgado de Instrucción, ya que se entiende, o así debería ser, que estos Juzgados de violencia sobre la Mujer tienen o deberían tener una formación específica en dicha materia.

La ampliación del concepto de violencia de género, así como el suplir todas las carencias que he señalado no garantizaría, ni mucho menos, el fin de los juicios paralelos en esta materia, pero, en mi opinión, suavizaría un poco su impacto, ya que, a mayor formación y especialización, mayor calidad de la justicia tendremos, y una mejor protección de la víctima obtendremos en todos los niveles. Unos órganos judiciales formados en perspectiva de género tendrán en cuenta dicha perspectiva en sus sentencias, contribuyendo así a la consecución de un sistema de justicia feminista y democrático.

### **c) Necesaria formación especializada de los profesionales implicados en los procesos de violencia de género**

---

<sup>31</sup> CARRIZO GONZÁLEZ CASTELL, A., “Juicios paralelos y violencia sobre la mujer: de la posible influencia del “yo si te creo” en las decisiones judiciales”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 461.

<sup>32</sup> Ibid.

Como se ha podido observar en el apartado anterior, una de las claves para alcanzar una justicia de mayor calidad y para suavizar el impacto mediático en los casos de violencia sobre la mujer es la formación especializada en esta materia. Es este apartado, veremos cómo han ido caminando los diferentes cuerpos legales y pactos hacia esta necesaria formación, pero también analizaré el impacto y la efectividad de estas medidas en la realidad social y jurídica.

Ya con la ley 1/2004 se comprendió la necesidad de una formación especializada y multidisciplinar de los profesionales que participan en los procesos de violencia de género, poniéndose en marcha un conjunto de medidas que buscaban dar una respuesta integral y desde todos los ámbitos; es por ello que se apostó por una serie de medidas de sensibilización, prevención, detección e intervención en el ámbito educativo, sanitario, jurídico y, muy importante, en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. En cuanto a la especialización judicial, la mencionada ley 1/2004 prevé unos cursos de formación relativos a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género, tanto para jueces y magistrados, como para fiscales, secretarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses, y resto de personas de la Administración de Justicia.

Por otro lado, el Convenio de Estambul, siguiendo esta línea, incentiva a los países firmantes para la mejora del sistema de formación y sensibilización de los agentes que participan en el proceso. Es por ello por lo que el mencionado Pacto de Estado de 2017<sup>33</sup> insta al Gobierno a “continuar avanzando y garantizar la formación especializada y acreditada que permita valorar el aprovechamiento de conocimiento de los magistrados al frente de órganos jurisdiccionales especializados”, formación impartida desde la perspectiva de género y derechos humanos. Algunas propuestas del pacto para garantizar dicho objetivo son la inclusión de mayor número de temas de derecho antidiscriminatorio en las oposiciones a judicatura, que el conjunto del Derecho antidiscriminatorio se integre en el programa anual de la Escuela Judicial como materia principal y evaluable, así como la formación obligatoria de los jueces y Magistrados, que debe ser incluida por el Consejo General del Poder Judicial en la formación continua anual. Además, recoge una disposición que hace particular referencia a los medios de comunicación puesto que los involucra en un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género,

---

<sup>33</sup> Así lo establece el propio folleto del Pacto. Retrieved from <http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/FolletoPEVGcastweb.pdf>

que pretende impulsar una formación especializada en perspectiva de género para los profesionales de la información.<sup>34</sup>

Es evidente que la trayectoria legislativa española ha intentado avanzar a la par que el Convenio de Estambul en el impulso de la formación específica que se ha demostrado imprescindible para la erradicación de la violencia de género. Una formación que más que interdisciplinar, en palabras de Carrizo González-Castell<sup>35</sup>, es una formación “que se realiza con la cooperación de varias disciplinas (...), ya que el fenómeno de la violencia de género tiene múltiples frentes y requiere de una actuación conjunta de todos los agentes implicados en su erradicación, debiendo estar todos ellos lo suficientemente formados como para atender a las mujeres en un plano no solamente físico sino también psíquico, jurídico y social”.

Además, también se puede observar como dichos avances legislativos afectan también al tema que nos ocupa, los medios de comunicación, haciéndose referencia expresa a los mismos y a su formación a la hora de tratar un tema tan delicado como es la violencia de género. De la formación judicial en general de los profesionales de la información, hablaré más adelante; sin embargo, me parece importante destacar esta formación más especializada en esta materia. Debemos analizar ahora si este conjunto de buenas intenciones tiene una aplicación actualmente real y efectiva en el conjunto de los agentes sociales; en concreto, me centraré en la verdadera puesta en práctica de dicha formación en los medios de comunicación y entre los miembros de los órganos judiciales.

El Código deontológico del periodismo es un documento que recopila los fundamentos generales que regulan el comportamiento de los informadores. El contenido de este código tiene como objetivo mejorar el tratamiento informativo de algunas de las cuestiones sociales de mayor actualidad. En España, desde 1993, funciona el Código Deontológico de la FAPE<sup>36</sup> y es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo la encargada de velar por su cumplimiento. Sin embargo, no existe la posibilidad de sanción institucionalizada, y la aplicación de estas normas éticas se hace de forma libre e individual. Por lo que el deber de sensibilidad y “celo profesional” en los

---

<sup>34</sup>Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Serie D. Número 199 de 3 de agosto de 2017.

<sup>35</sup> CARRIZO GONZÁLEZ CASTELL, A., “Juicios paralelos y violencia sobre la mujer: de la posible influencia del “yo si te creo” en las decisiones judiciales”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 469.

<sup>36</sup> Retrieved from <http://fape.es/home/codigo-deontologico/>

casos de violencia y discriminación que recoge el código, no es más que una plasmación de buena voluntad, pero que no tiene ninguna vinculación real en el periodista.

Por otro lado, haciendo un repaso por los planes de estudio de las principales universidades públicas españolas, la mayoría de ellas no ofrecen asignaturas relacionadas con la perspectiva de género y la comunicación, ni ningún tipo de formación especializada en violencia de género, y las pocas que ofrecen la posibilidad lo hacen en forma de asignatura optativa, por lo que tampoco garantizan completamente dicha formación. Con respecto a la educación de postgrado, solo encontramos en todo el país un Máster que aborde de manera directa este asunto: el Máster de Comunicación y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su codirectora, la periodista Isabel Muntané, afirmaba en una entrevista<sup>37</sup>, “hasta donde yo sé, no existe formación con perspectiva de género. Esta formación o este mensaje queda en manos de cada profesora y profesor, de si tiene conciencia y quiere llevarla al aula.” Por tanto, vemos que, en las primeras fases de formación de los profesionales de la información, la perspectiva de género y la especialización de la comunicación en casos de violencia de género es escasa por no decir nula.

La formación posterior a la etapa estudiantil, que deberían recibir los profesionales de la información, también es escasa como afirman numerosas periodistas, como Raquel de Blas, Violeta Molina y Macarena Baena<sup>38</sup>, de la plantilla EFE, que inciden que uno de los principales problemas es la falta de formación y la precariedad. Explicaba también Gómez Montano<sup>39</sup> que “la formación no es cara. Y la redacción más comprometida la reclama. Los manuales de estilo dedican alguna página a este asunto, pero la redacción apenas los consulta, para qué nos vamos a engañar. Es mucho más eficaz programas o cursos de unos días o unas horas periódicamente para que la redacción vea que la empresa editora es la primera interesada en estar a la vanguardia”

Queda patente, por tanto, que la formación de los periodistas depende únicamente de la buena voluntad de las empresas de la información de impartir cursos y formaciones especializadas, puesto que no hay herramientas a nivel institucional que garanticen dicha especialización y, aunque hay muchas redacciones y corporaciones estatales que ya han

---

<sup>37</sup> Declaraciones en la entrevista realizada por el periódico La Marea a Isabel Muntané. Retrieved from <https://www.lamarea.com/2016/09/18/la-formacion-perspectiva-genero-no-existe-las-facultades-periodismo/> 2016.

<sup>38</sup> Declaraciones realizadas en el artículo: CARBALLAR, O., “Feminicidios: asignatura pendiente del periodismo” *Periódico La Marea*, 2020. Retrieved from <https://www.lamarea.com/2020/01/22/feminicidios-asignatura-pendiente-del-periodismo/>

<sup>39</sup> Ibid.

implantado estos cursos, no es suficiente. Desde mi punto de vista, se necesita una educación en género coordinada y obligatoria para todos los profesionales de la información, empezando, por supuesto, por las Universidades. Sin una formación real y especializada en materia de género, no se logrará un tratamiento adecuado de este tipo de noticias y seguirán abundando las de carácter sensacionalista, que propician y alimentan a los temidos juicios paralelos.

En relación con la formación real de los órganos jurisdiccionales en violencia de género, voy a utilizar como referencia una ponencia de la Dra. Marta del Pozo a la que asistí, relacionada con esta materia, en el Congreso de Igualdad de la Universidad de Salamanca. Uno de los principales problemas que se puede observar en nuestro país es el escaso número de juzgados especializados en violencia de género. Como sabemos con la ley 1/2004, se modificó la LOPJ añadiendo el artículo 87 bis, entre otros, el cual señalaba que en cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial, pudiendo extender su jurisdicción de manera excepcional a dos o más partidos de la misma provincia. Por otro lado, este artículo también contempla la posibilidad en algunas ocasiones de hacer compatibles los Juzgados de Primera instancia e Instrucción para que también conozcan de estas materias (de manera no exclusiva). En España, según datos del Ministerio de Justicia<sup>40</sup> existen 431 partidos judiciales, sin embargo, el número total de Juzgados exclusivo en materia de Violencia de género es de 106 en toda España, y unos 355 juzgados compatibles<sup>41</sup>. Es decir, desde el año 2004, únicamente se han creado un 25% del total de juzgados especializados que España debería haber creado en estos años desde que se implementó la ley, porque, aunque la ley contempla la compatibilidad del conocimiento de este asunto a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción, no debemos olvidar que estos Juzgados no son especializados en esta materia y que, además, tienen que conocer de muchos otros asuntos aparte de la violencia de género; por tanto, lo único que se consigue es un incremento de la carga de trabajo de estos con la consecuencia de que la atención que se prestará a estos asuntos será, evidentemente, mucho menor que en un juzgado exclusivo.

---

<sup>40</sup> Ministerio de Justicia, cartografía de partidos judiciales. Retrieved from [https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429084761?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPartidos\\_Judiciales.PDF](https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429084761?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPartidos_Judiciales.PDF)

<sup>41</sup> Consejo General del Poder Judicial. Informe de los Juzgados de Violencia de género por CCAA del 4 enero de 2018.

La ley 1/2004 en su Disposición Adicional 6ª, apartado 3 bis, recoge la especialización en la materia de los Juzgados de lo Penal. Esto se ha traducido en la realidad en la especialización de 33 Juzgados de lo Penal en toda España, juzgados que conocerán la materia de una manera exclusiva, pero no excluyente, por lo que estamos ante el mismo problema. Además, nos encontramos con la incoherencia de tener órganos de instrucción especializados que han de remitir el grueso de sus causas a órganos de enjuiciamiento en primera instancia no especializados<sup>42</sup>.

Actualmente, tenemos en España 16 provincias que no cuentan con ningún Juzgado especializado en violencia de género, 16 años después de la entrada en vigor de la ley, lo que muestra, a mi parecer, una clara insuficiencia de medios para lograr una verdadera justicia especializada en violencia de género. Esto, sumado al creciente número de denuncias por parte de las mujeres, en virtud de las campañas de visibilización y sensibilización en este ámbito, pone de relieve la necesidad, entre otras cosas, de crear un mayor número de Juzgados especializados, para dar respuesta adecuada a la creciente demanda de nuestra sociedad.

Por otro lado, como ya mencionaba la Dra. Del pozo en su ponencia, ha habido poco más de 60 cursos de formación en lo que lleva en vigor la ley 1/2004, es decir, una media de 4 cursos al año, con una duración de alrededor de 3 días. Además, es importante destacar que son cursos que, aunque en el caso de los jueces o magistrados que quieran acceder a una plaza en un juzgado especializado en violencia de género son de carácter obligatorio, no son evaluables, por lo que tampoco podemos asegurar que, por la mera presencia, se hayan adquirido los conocimientos impartidos. Por otro lado, en muchas ocasiones dichos cursos no van dirigidos exclusivamente a los miembros de la judicatura que se encargan de la violencia de género, sino a cualquier miembro de la judicatura en general. Esto, desde mi punto de vista, en principio no es negativo, pero debe ir acompañado de una formación más específica y concreta para aquellos que se van a encargar de instruir y enjuiciar los asuntos relacionados con la violencia de género.

En definitiva, aunque los avances e inversión en formación especializada para los órganos judiciales son innegables, estamos todavía lejos de conseguir una verdadera justicia especializada en violencia de género. Esta formación y especialización está muy bien

---

<sup>42</sup> De este parecer se muestra MARTÍN LÓPEZ P., “Los Juzgados de lo penal especializados en Violencia de género: Implementación y retos”, *Curso: Valoración del funcionamiento de los juzgados penales especializados en violencia sobre la mujer*. Marzo 2016.



plasmada de manera formal, pero, como he expuesto, tiene todavía bastantes carencias a nivel material.

El limitado concepto de violencia de género, la escasa formación real de medios de comunicación y judicatura, así como la insuficiencia de Juzgados exclusivos de violencia de género, nos muestran el largo camino que nos queda por recorrer para llegar a una verdadera justicia feminista. Creo, además, que todo lo expuesto está claramente relacionado con la mediatización excesiva de los casos de violencia sobre la mujer, la falta de formación de los medios de comunicación, entre otras cosas, a la hora de tratar este delicado tema, provoca situaciones en las que, o se revictimiza a la víctima, o hay una completa lesión a la presunción de inocencia del presunto agresor y una puesta en cuestión de los tribunales, criticándose su falta de sensibilidad. En palabras de Carrizo González-Castell<sup>43</sup> “se confunde esa sensibilidad con una mayor formación y especialización de los profesionales que deben conocer de este tipo de asunto”.

Me gustaría hacer, para finalizar este punto, una breve referencia al anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo de 2020. Esta futura ley propone una serie de cambios en materia penal mediante la tipificación de nuevos delitos y la modificación de tipos penales, con el objetivo, entre otras cosas, de que la ausencia de consentimiento en una relación sexual será siempre considerada agresión sexual. Por otro lado, y este es el punto que más nos interesa, este anteproyecto, siguiendo la línea del Convenio de Estambul, contempla la violencia sexual contra las mujeres como una forma de violencia de género y que esta se pueda producir fuera del ámbito de la pareja o expareja, estableciendo que serán, por tanto, los Juzgados de violencia sobre la mujer los encargados de conocer de estos asuntos.

Además, al igual que el Convenio de Estambul, recoge la mutilación femenina, la trata y el matrimonio forzado como una forma de violencia sexual. En definitiva, plasma de manera legal muchos de los preceptos establecidos en el Convenio de Estambul de 2014 así como de las propuestas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 2017. En el caso de que, finalmente, dicha ley salga adelante, supondría un gran avance en esta materia y un paso más en la incansable lucha de nuestro país contra la violencia sobre la mujer.

---

<sup>43</sup> CARRIZO GONZÁLEZ CASTELL, A., “Juicios paralelos y violencia sobre la mujer: de la posible influencia del “yo si te creo” en las decisiones judiciales”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 471.

#### **4. REDES SOCIALES Y JUICIOS MEDIÁTICOS**

En este punto, me centraré en analizar cómo las redes sociales contribuyen a magnificar los juicios paralelos y multiplican las eventuales lesiones de los derechos fundamentales que hemos visto a lo largo del trabajo. Además, analizaré de una manera un poco más detallada recientes ejemplos concretos de juicios paralelos que han tenido gran repercusión en nuestro país.

##### **a) Posverdad y homogeneidad en las redes**

La era digital ha venido para quedarse, la revolución tecnológica y la aparición de Internet y de las redes sociales han marcado un antes y un después en nuestras vidas, en nuestras sociedades y en la forma de relacionarnos. En el caso que nos ocupa, las redes sociales han tenido una grandísima importancia y repercusión en todo lo relativo a la información y los medios de comunicación, siendo un instrumento que está al alcance de todos y que permite informar e informarse de manera inmediata y con gran influencia. Sin embargo, esta gran masificación de la información ha acarreado bastantes problemas en el plano jurídico en general y en el marco de los juicios paralelos en particular.

Podemos decir que las redes sociales más usadas para transmitir noticias, opinar e interactuar sobre sucesos en particular son Facebook y sobre todo Twitter. Se trata de una red social en la que la gente interactúa escribiendo “tweets” sobre cualquier tema. Participan en ella tanto ciudadanos de a pie, como celebridades, políticos, instituciones oficiales...por tanto, tiene un inmenso alcance. En este panorama, los medios de comunicación desde sus respectivos perfiles también usan las redes sociales como un canal más de difusión de noticias, algo totalmente legítimo. La cuestión problemática es que las redes sociales, y en particular Twitter, se han convertido en un foro en el que especialmente, cuando se producen hechos noticiables y bajo la máxima de la libertad de expresión, todos los usuarios opinan sobre todo, teniendo o no conocimiento de causa, y se vierten de manera desmedida todo tipo de informaciones resultando difícil, llegado un momento, diferenciar la “verdad” del asunto. Por ello, muchos autores han denominado este escenario paralelo como “posverdad” que Caro Figueroa<sup>44</sup> define como “la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar opinión pública e influir en las

---

<sup>44</sup>CARO FIGUEROA G., “Post-verdad: nueva forma de la mentira”. *Diario Clarín*, 22 de noviembre 2016. Retrieved from [https://www.clarin.com/opinion/Post-verdad-nueva-forma-mentira\\_0\\_HyJwGEMMg.html](https://www.clarin.com/opinion/Post-verdad-nueva-forma-mentira_0_HyJwGEMMg.html)

actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales”.

En este contexto, las redes sociales han ido un paso más allá en la formación de los juicios paralelos. Que el proceso penal sea noticia y por ello se informe es algo normal y, como hemos visto, beneficioso para la sociedad. Sin embargo, el alcance y el impacto de la noticia se ha multiplicado exponencialmente con las redes sociales en un doble sentido; por un lado, como hemos dicho, que periodistas y medios de comunicación utilicen este medio para llegar a más gente y para adaptarse a las nuevas formas de transmitir información; y por otro lado, que, a partir de dicha información, los usuarios interaccionen y empiecen a crearse corrientes de información de contenido sesgado en la mayoría de los casos para tratar de posicionar a la opinión pública en un veredicto de culpabilidad o inocencia. Todo esto con un escaso o casi nulo contraste de información y de veracidad, distorsionando totalmente la relación entre información y justicia. Como bien dice Matute Chamarro<sup>45</sup> “da la sensación de que el derecho a la libertad de expresión e información es un derecho preponderante del ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre el resto de los derechos reconocidos constitucionalmente, y carente de límites”.

Ese efecto multiplicador de los juicios paralelos que han adquirido las redes sociales es consecuencia, en gran parte, de las propias características de las mismas, en particular, de la red Twitter ya que busca la viralización de los mensajes, dando herramientas para ello como son los “retweets”, los “hashtags” ... Además, hay que tener en cuenta la existencia de perfiles con gran cantidad de seguidores, los denominados “influencers”, cuyos mensajes y opiniones tiene una grandísima repercusión y una posición dominante, así como los perfiles anónimos que hacen más peligrosos aún los juicios paralelos, puesto que la persona detrás de este perfil actúa con bastante impunidad. Todo esto provoca que en los casos judiciales más mediáticos llegamos en palabras de Bueno de Mata<sup>46</sup> “a una especie de linchamiento mediático en el que todos los requisitos para el origen de los juicios paralelos no solo existen, si no que Twitter se instituye como un elemento exponencial de este tipo de juicios, en los que la manipulación de la información judicial no nos deja separar lo cierto de lo incierto”. Así mismo las redes sociales contribuyen a la creación de estados de opinión enfrentados respecto a un mismo caso judicial,

---

<sup>45</sup> MATUTE CHAMARRO, I., “*Los delitos de odio en las redes sociales*”. Trabajo Fin de Título del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Salamanca, 2017, p.3 y ss.

<sup>46</sup> BUENO DE MATA F., “El principio de publicidad procesal ante la tecnología: juicios mediáticos redes sociales y big data” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 482.

encontrándonos detractores y defensores que actúan como si de las partes de un juicio se tratara.

Como es evidente, los efectos perniciosos de los juicios paralelos sobre los derechos que hemos venido analizando al comienzo de este trabajo (publicidad, libertad de información, presunción de inocencia, honor, intimidad y propia imagen...) se han visto magnificados por las redes sociales.

Con respecto a la publicidad procesal, aunque en principio pueda parecer que las redes sociales contribuyen como instrumento exponencial a hacer cumplir este precepto constitucional, la realidad nos demuestra que no es exactamente así. Como ya hemos analizado, la publicidad procesal no es absoluta y está sometida a una serie de limitaciones en aras a la protección de otros derechos. Por tanto, esta publicidad procesal no se puede entender como un cheque en blanco para que cualquiera, generalmente no profesionales, pueda opinar o dar informaciones sesgadas sobre cualquier hecho judicial noticiable, puesto que, en ocasiones, el ejercicio de esta libertad de expresión y derecho a la publicidad estaría menoscabando otros importantes derechos, relativos, sobre todo, a las partes involucradas en el proceso penal. Debemos intentar mantener un equilibrio entre la publicidad procesal y libertad de expresión y el resto de los derechos necesarios para garantizar un juicio justo, un equilibrio que, en el caso de las redes sociales, debido a su magnitud y alcance, es muy difícil de conseguir. Así nos encontramos en palabras de Bueno de Mata<sup>47</sup> con que “las nuevas tecnologías pueden ser perjudiciales para la propia actuación judicial y para el principio de publicidad procesal, dado que su uso desmedido puede poner en duda las necesarias garantías para la celebración de un juicio justo”

Ya ha quedado patente en páginas anteriores el gran conflicto existente entre los juicios paralelos y la presunción de inocencia, conflicto que como hemos dicho en el caso de las redes sociales se aumenta en gran medida. Se produce en los casos penales más mediáticos y sobre todo en aquellos en los que la víctima es, como se suele denominar, “especialmente vulnerable” (mujeres, niños...) un linchamiento masivo, en el que se trata al presunto autor directamente como culpable, de una manera mucho más desmedida que la que veíamos en los medios de comunicación tradicionales, ya que, en este contexto, los usuarios actúan y opinan con casi total impunidad. Y es que, si ya veíamos insuficiente

---

<sup>47</sup> BUENO DE MATA F., “El principio de publicidad procesal ante la tecnología: juicios mediáticos redes sociales y big data” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 478.

la protección de este derecho por medio de la tutela civil o penal del derecho al honor en los casos de los medios de comunicación tradicionales, cuando hablamos de redes sociales, esta tutela se hace prácticamente imposible, en tanto que el derecho es menoscabado de manera masiva y, en gran parte de las ocasiones, de manera anónima, por lo que el afectado queda completamente desprotegido.

Con respecto al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen y su colisión con el derecho a la libertad de información, hay, como hemos analizado, una abundante y consolidada jurisprudencia que ha establecido las reglas y la ponderación en cada caso de estos derechos. Como vimos en los caso penales y noticiables, la libertad de información tiene una posición preferente en algunos casos en detrimento de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, toda esta doctrina es inaplicable en el momento en que los que están lesionando estos derechos, aludiendo a la libertad de “información” y de expresión, son los usuarios particulares no profesionales, que no están sometidos ni a códigos deontológicos, ni a responsabilidades disciplinarias, más que las que pueda tomar la propia red social por no respetar sus condiciones de uso. Además, la información que está constitucionalmente protegida es aquella que es veraz, (interpretado por el TC como aquella que ha sido contrastada) algo que no sucede en absoluto en las redes sociales, en las que los “influencers” de la información/opinión a menudo se posicionan en unas corrientes ideológicas u otras, difundiendo en muchas ocasiones “fake-news” que refuerzan su visión sesgada del asunto. Nos situamos, entonces, ante un *mare magnum* donde se mezcla información, con opinión y con noticias directamente falsas que nos hacen muy difícil separar lo cierto de lo incierto y llega un momento en el que en palabras de Noam Chomsky<sup>48</sup> “si no paras de decir mentiras, el concepto de verdad simplemente desaparece”.

Las redes sociales, por tanto, contribuyen a magnificar los juicios paralelos y sus lesiones en los derechos que garantizan un juicio justo. La solución para este asunto es, desde mi punto de vista, difícil y delicada, porque, aunque es cierto que el ordenamiento jurídico pone a disposición del afectado la tutela civil/penal del derecho al honor, creo que no es suficiente y que sería acertado la creación de elementos específicos que atiendan a la mayor lesión que se produce de estos derechos a través de las redes. Además, creo que

---

<sup>48</sup> Declaraciones realizadas en la entrevista: GOODMAN A., “Si no paras de decir mentiras el concepto de verdad simplemente desaparece” *CTCX Contexto y acción*, 2020. Retrieved from <https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31960/noam-chomsky-trump-sanidad-pandemia-mentiras-sociopatas.htm>

en estos casos deberían ser las propias redes sociales las que, en su gestión y control del uso de las mismas, establecieran mecanismos preventivos y de verificación para intentar acabar con aquellas cuentas que se dedican de manera sistemática a difundir noticias falsas, o expandir juicios paralelos que lesionan derechos fundamentales. Siempre teniendo en cuenta y respetando el equilibrio de todo esto con la libertad de expresión, algo que es sumamente complicado.

A continuación, analizaré algunos de los casos penales más mediáticos de la actualidad y el impacto y la influencia de los juicios paralelos en los mismos.

### **b) Caso Ana Julia Quezada**

El caso Ana Julia Quezada hace referencia a los sucesos relacionados con la desaparición del niño Gabriel Cruz Ramírez, la tarde del 27 de febrero de 2018 en la localidad almeriense de Las Hortichuelas, y su inmediato asesinato en una finca familiar.

El hallazgo de su cadáver se produjo el 11 de marzo en el maletero del vehículo de Ana Julia Quezada, que por entonces era pareja del padre del menor. Más tarde, la acusada del asesinato confesaría los hechos.

La investigación del caso condujo a la realización del juicio durante el mes de septiembre de 2019. El jurado popular concluyó que la autora confesa era culpable de asesinato. La sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Almería condenó a la acusada a prisión permanente revisable por el asesinato y a una pena suplementaria de ocho años y tres meses más por dos delitos de lesiones psíquicas y dos contra la integridad moral en cada uno de los padres del menor.

Este caso ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años; el hecho de que la víctima fuera un niño de 8 años supuso desde el principio un foco mediático, primero, durante la búsqueda y más tarde, durante la investigación y el juicio. Además, si a esto le sumamos el hecho de que la autora confesa del crimen era la pareja del padre del niño, tenemos el caldo de cultivo ideal para una gran repercusión social y mediática.

Desde el primer momento en que se hizo pública la desaparición del niño, todos los medios de comunicación se centraron en el tema. Hubo también grandes movilizaciones de apoyo a la familia que se iniciaron desde las redes sociales y la calle, absolutamente todo el mundo conocía el caso de Gabriel; esto produjo que semanas más tarde, cuando se encontró el cadáver del pequeño en el coche de Ana Julia Quezada, todos estos movimientos de solidaridad y apoyo se convirtieron en mensajes de odio y se produjera un auténtico linchamiento social a la presunta autora en esos momentos. La sociedad la

condenó mucho antes de la celebración del juicio. Además, por parte de los medios de comunicación también se realizó una campaña masiva de “información” sobre este tema, programas especiales, tertulias nocturnas... donde una serie de “expertos” discutían acerca de los motivos de la presunta autora, de los detalles más escabrosos de la autopsia del niño, así como de las relaciones familiares entre Ana Julia y su pareja. El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) señaló<sup>49</sup> "continuas insinuaciones y juicios paralelos" en la cobertura mediática del juicio con jurado contra Ana Julia Quezada, y ha afeado la "descripción morbosa de los detalles más duros" de la autopsia del niño Gabriel Cruz, a pesar del pacto ético que algunos medios de comunicación firmaron por respeto a los padres.

Por otra parte, y entrando ya en el proceso penal, nos encontramos ante un delito de homicidio consumado y confeso que entra dentro de la competencia objetiva del Tribunal del Jurado, es decir, este caso fue juzgado por un órgano compuesto por ciudadanos legos. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, con respecto a todo lo analizado durante el trabajo relativo a la afectación de los derechos procesales en los juicios paralelos, y es que, bajo mi punto de vista, esta afectación y, en particular, al derecho a un juez imparcial, se hace mucho más patente en los casos que son competencia del Tribunal del Jurado. Puesto que, aunque bien es cierto que estos ciudadanos son guiados e instruidos durante el proceso por un magistrado, son ellos los que finalmente dan el veredicto de culpabilidad. Ciudadanos que, como cualquiera, incluso los estudiosos del derecho, pueden verse influenciados por el bombardeo informativo que tiene lugar en los casos más mediáticos.

Volviendo al caso que nos ocupa, en septiembre de 2019 tuvo lugar el juicio; desde el comienzo de este, era evidente la mediatización del mismo, en el que hasta la acusada cambió completamente su aspecto físico para dar una “mejor sensación” ante las cámaras, signo evidente del importante papel que jugaron los medios de comunicación en este caso. Finalmente fue condenada a prisión permanente revisable (una figura discutida que también tiene mucha relación al tema que nos ocupa), como pedían Fiscalía y acusación particular.

---

<sup>49</sup> Declaraciones realizadas en el artículo: “El Consejo Audiovisual afea "juicios paralelos" sobre Ana Julia Quezada en los medios durante la vista oral” *Europapress*, 2019. Retrieved from <https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-caa-afea-continuas-insinuaciones-juicios-paralelos-ana-julia-quezada-medios-vista-oral-20191031125323.html>

Meses más tarde, el letrado<sup>50</sup> de Ana Julia Quezada pidió al TSJA que contribuyera a "una profunda reflexión" al hilo de "la desmedida presión mediática" que a su parecer padeció Quezada, apuntando a la existencia de "juicios paralelos" bajo la influencia también de las redes sociales, tras su "exhibición" como si fuera "un reo en la Edad Media" y un análisis de "su vida al minuto desde la óptica de lo negativo". Solicitaba la nulidad de lo actuado y que se celebrará un nuevo juicio con un tribunal profesional. El abogado ha apuntado además a la "minuciosa, frecuentemente sesgada y parcial investigación policial y periodística", con detalles que están "entremezclados" sobre el pasado de la acusada, lo que "unido a la publicidad de su causa, le supuso una previa "demonización" a la que, "prácticamente ningún ciudadano, incluidos los llamados a juzgarle, serían inmunes". No sería adecuado afirmar que la sentencia fuera parcial o demasiado dura con un análisis tan superficial de los hechos, pero sí me parece importante destacar como la existencia del juicio paralelo lesionó gravemente la presunción de inocencia de la autora, que fue condenada por la sociedad mucho antes de que el juicio tuviera lugar, debido, en gran parte, al tratamiento que hicieron los medios de comunicación del caso, y como todas estas circunstancias, que deberían ser ajenas al propio procedimiento penal, pueden llegar o no a afectar , en este caso, al Tribunal del Jurado.

### **c) Caso Diana Quer**

Con el nombre caso Diana Quer, se conocen los sucesos relacionados con la desaparición y muerte de la joven Diana Quer, en la madrugada del 21 al 22 de agosto de 2016 en la localidad coruñesa de Pobra do Caramiñal. Fue un caso que tuvo una gran repercusión social y mediática por las circunstancias en las que se dio. Diana Quer estuvo un año y cuatro meses desaparecida hasta que se arrestó y confesó José Enrique Abuín, alias 'el Chicle'. Durante la desaparición de casi 500 días con su respectivo estancamiento policial, tuvo lugar un gran circo mediático en el que nuevamente tertulianos, periodistas y otros "informadores" construyeron múltiples hipótesis alrededor de la desaparición. Se produjo un verdadero juicio paralelo en el que se vertían acusaciones constantes sobre la familia de Diana, padre o madre, como presuntos autores, revelándose todo tipo de intimididades familiares tanto de los padres como hasta de la propia Diana, a la que se le

---

<sup>50</sup> Declaraciones realizadas en el artículo SÁNCHEZ, N., "La defensa de Ana Julia Quezada solicita que se repita el juicio ante un tribunal profesional" *Diario El País*, 2019. Retrieved from [https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/1572437598\\_605017.html](https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/1572437598_605017.html)



llegó a “culpabilizar” haciéndose constantes alegaciones sobre las compañías con las que estaba o los chicos con los que salía.

Durante todos estos meses, medios de comunicación y redes sociales se dedicaron a especular acerca de la teoría de que los padres tuvieran algo que ver con la desaparición, valiéndose para ello de todo tipo de informaciones sacadas completamente de contexto, que hicieron que, durante esos meses, toda la atención mediática girará en torno a los detalles más privados de esta familia y de su posible implicación en el caso. Manuel Jabois recoge muy bien este sensacionalismo que se formó alrededor de la familia de Diana Quer en su artículo<sup>51</sup> “A la caza de la familia Quer”; en él, declara que se convirtió “su vida en una especie de “reality show” donde se elucubraba con amores, vacaciones y broncas públicas de unos miembros de la familia convertidos en personaje públicos a causa de una circunstancia dramática”.

Finalmente, el caso se resolvió cuando se detuvo a José Enrique Abuín, que confesó ser el autor del crimen y se halló el cuerpo de Diana, dando fin a todo este circo mediático donde se puso en evidencia la irresponsabilidad y el poco respeto que tuvieron los medios de comunicación con una familia que estaba pasando por esa terrible situación.

En este caso, no podemos hablar de que el juicio paralelo que se formó afectará al procedimiento penal en cuestión, porque, finalmente, se encontró al verdadero culpable, pero es una muestra más de formación de juicios paralelos en los casos más mediáticos, independientes de las verdaderas investigaciones oficiales y que influyen, en gran medida, en la opinión pública.

## **5. POSIBLES SOLUCIONES**

En este apartado estudiaré las diferentes soluciones que se pueden dar a los juicios paralelos y a los problemas jurídicos que estos acarrearán. Desde diferentes perspectivas analizaré la procedibilidad de ciertas modificaciones, para intentar evitar los juicios paralelos, o para que las lesiones que estos causen sean menores, puesto que una justicia sin este tipo de circos mediáticos es una justicia con mayores garantías y derechos procesales y, en definitiva, una justicia de mayor calidad.

---

<sup>51</sup> JABOIS M., “A la caza de la familia Quer” *Diario El País*, 2018. Retrieved from: [https://elpais.com/politica/2018/01/03/actualidad/1515008214\\_301244.html](https://elpais.com/politica/2018/01/03/actualidad/1515008214_301244.html)

### **a) Autorregulación de los medios de comunicación y deontología periodística**

Una de las posibles soluciones para mejorar las relaciones entre los medios de comunicación y la justicia penal, sería el fortalecimiento de la autorregulación de los medios de comunicación y su deontología y códigos éticos. Actualmente, como ya hemos visto anteriormente, únicamente existe un Código Deontológico para la prensa, donde se establecen, entre otras cosas, unos límites éticos que deberían ser respetados, pero, como vimos, con una escasa o nula capacidad sancionadora en caso de incumplimiento. Sin embargo, el resto de los medios de comunicación no cuentan de manera formal con ningún código ético, y podría ser una buena iniciativa de auto control de los propios medios, ya que, adhiriéndose a dichos códigos, se comprometen a mantener ciertos principios éticos.

Hay posturas que incluso abogan por una regulación de los medios desde el propio Estado, acudiendo a principios de “interés público”; sin embargo, en palabras de García Perrote-Forn<sup>52</sup>, “el problema radica en que la materia objeto de regulación ostenta un carácter básicamente privado, tutelando derechos como la libertad de expresión, derecho a la información y libre competencia”. El problema es que la regulación de los medios por parte del Estado en la mayoría de las ocasiones perturba el libre ejercicio de esta importante profesión, algo que no es, ni mucho menos, deseable en una sociedad democrática. De hecho, en España han proliferado en los últimos años los “Consejos audiovisuales” como medios de control de la programación. Sin embargo, como establece García Perrote-Forn<sup>53</sup> “a nadie se le escapa que estos organismos, teóricamente independientes, en la práctica parece ser que lo son poco y están notablemente vinculados al poder ejecutivo, lo cual podría evitarse si se garantizara la imparcialidad de los medios que lo componen”.

En definitiva, el verdadero autocontrol debe venir de los propios medios de manera independiente, que fueran las propias empresas de comunicación las que establecieran unas pautas comunes de actuación haciendo referencia especial al tratamiento de noticias durante los procesos penales, y los derechos de los intervinientes en el mismo. Un cumplimiento de estas pautas éticas conllevaría a una efectiva evitación de los juicios paralelos y, por tanto, al acceso a una información más veraz y respetuosa con los derechos de las partes, en especial la presunción de inocencia. Esto provocaría una mayor

---

<sup>52</sup> GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 186.

<sup>53</sup> Ibid.

confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la justicia como en la credibilidad de los propios medios.

### **b) Formación especializada**

Uno de los principales problemas que hemos analizado a lo largo de este trabajo es la falta de formación especializada de los medios de comunicación en temas jurídicos en general y, como vimos más al detalle, en asuntos relacionados con la violencia de género. No se puede obviar la relación de causalidad que hay entre la poca formación de los profesionales de la información en asuntos jurídicos y la falta de precisión y rigor a la hora de informar sobre ellos, con los efectos negativos que esto conlleva. Como afirma Frascaroli<sup>54</sup> “si el periodista informa sobre una materia que no domina, difícilmente estará en condiciones de ponderar adecuadamente las consecuencias que puede provocar la noticia que divulgue y, en tal caso, toda noción de cautela y prudencia se pierde irremediablemente”

Basándome en los datos del estudio que realizó sobre este tema Carlos Oliva Marañón<sup>55</sup>, de la Universidad Rey Juan Carlos para la Revista de Docencia Universitaria, donde analizó 9 universidades españolas<sup>56</sup> por su tradición en la impartición de los estudios de Periodismo durante más de 15 años, se puede concluir que las asignaturas de contenido jurídico tienen muy poca relevancia en los planes de estudios de Periodismo, excepto en la Universidad Complutense de Madrid. En consecuencia, propone una serie de medidas de mejora, como organizar un itinerario formativo obligatorio de especialización denominado Periodismo Jurídico, para crear así periodistas con perfiles jurídicos, que serán los más preparados y adecuados para informar con rigor sobre estos temas.

Por tanto, creo que una buena medida para intentar evitar los juicios paralelos es que los propios profesionales de la información tengan un conocimiento más o menos especializado en las Ciencias jurídicas, conocimiento que empieza en las universidades, creando itinerarios especializados en este asunto y que debería continuar en las propias

---

<sup>54</sup> FRASCAROLI, M. S. “Justicia Penal y medios de comunicación. La influencia de la difusión masiva de los juicios criminales sobre los principios y garantías procesales” Ad-Hoc, Buenos Aires 2004, p.216 y ss.

<sup>55</sup> OLIVA MARAÑÓN, C., “La formación jurídica del periodista en España: una necesidad para satisfacer el Derecho de la Información y el Derecho a la Información” *Revista de Docencia Universitaria*, Universidad Rey Juan Carlos, Vol. 12 (3), N.º extraordinario 2014, p.201-223.

<sup>56</sup> Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad Complutense de Madrid Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de La Laguna, Universidad de Navarra, Universidad Carlos III.

empresas y medios de comunicación, con cursos y seminarios especializados en el tratamiento de las noticias jurídicas.

**c) Control de la actividad informativa de los Mass Media en los casos penales**

Recordemos que los derechos de expresión e información en nuestro ordenamiento jurídico no son derechos absolutos, y que en ocasiones se ven limitados debido a la existencia de otros con los que deben convivir. Por lo que una solución para evitar los juicios paralelos, podría ser un mayor control y limitación de los mismos respecto a hechos noticiables que afectan a procedimientos objeto de tramitación judicial. Existen diversos tipos de controles dependiendo de quién los ejerce, controles políticos, sociales, judiciales o administrativos<sup>57</sup>. Como mencioné en el primer apartado de este punto, estaba siendo habitual en los últimos tiempos la creación de Consejos Audiovisuales en las diferentes comunidades autónomas cuya función, entre otras, es la elaboración de informes sobre el seguimiento informativo que las televisiones hacen de determinados sucesos y juicios que han tenido una gran repercusión, centrándose sobre todo en la protección de menores. Sin embargo, los Consejos Audiovisuales en los casos relacionados con la información de la actividad de los Tribunales de Justicia han optado preferentemente por el empleo de instrumentos conocidos como de “soft law”, primando la labor preventiva y de concienciación, mediante la utilización de fórmulas más flexibles para la realización de sus labores de control<sup>58</sup>. Algo que, como hemos visto, no ha sido muy efectivo. Se planteó, siguiendo con esta línea, la creación de un órgano unitario, que al igual que los Consejos Audiovisuales de las Comunidades Autónomas ejercieran estas labores de vigilancia y de emisión de informes y recomendaciones, pero a nivel nacional. La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General Audiovisual (LGCA) tenía como uno de sus objetivos la creación y regulación de una autoridad audiovisual estatal: el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), configurado como una autoridad independiente supervisora. Sin embargo, el cambio de gobierno que se produjo en las elecciones de 2011 impidió que el CEMA pudiera llegar a constituirse.

Por otro lado, desde muchas posturas se ha criticado la falta de efectividad de estos organismos. En primer lugar, porque carecen de cualquier fuerza vinculante y

---

<sup>57</sup> En este sentido: GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017, p. 184.

<sup>58</sup> En este sentido: ORENSES RUIZ, JC., “El control no jurisdiccional de los juicios en televisión por parte de las autoridades audiovisuales” *Dilemata*, nº 14, 2014 p., 121-140.

sancionadora, por lo que, a pesar de la buena intencionalidad de sus recomendaciones, el incumplimiento de estas no tiene ninguna consecuencia; y en segundo lugar, porque no está garantizada la absoluta independencia de estos órganos con el peligro de que en ocasiones actúen guiados por intereses partidistas del gobierno de turno, por lo que a niveles generales no parece un control muy efectivo.

Desde otras posturas, se ha defendido la adopción de un sistema similar al de Reino Unido conocido como el “contempt of court”; se trata de un sistema que pone ciertos límites a la información sobre procesos penales. Literalmente se puede traducir como el “desacato al tribunal”, es decir, un acto de desobediencia hacia un órgano judicial. El propio gobierno de Reino Unido establece en su página web<sup>59</sup> que se produce cuando alguien se arriesga a influir injustamente en un caso judicial. Pudiendo impedir que alguien tenga un juicio justo y pudiendo afectar el resultado del mismo. El desacato al tribunal incluye: desobedecer o ignorar una orden judicial, tomar fotos o gritar en el juzgado, negarse a responder a las preguntas del tribunal si se le llama como testigo, comentar públicamente un caso judicial, por ejemplo, en los medios de comunicación o en las redes sociales, con penas de hasta dos años de prisión. Algunos ejemplos que más nos interesan, en los que se podría incurrir en un delito de desacato al tribunal, son si se dice públicamente o en los medios de comunicación, que una persona es inocente o culpable, referencias a los antecedentes penales de alguien, revelar la identidad de alguien al que el juez había garantizado el anonimato, revelar la identidad de las víctimas de delitos contra la indemnidad sexual, revelar la identidad de testigos o acusados, si estos son menores de edad, o compartir pruebas y evidencias que están bajo secreto de sumario.

Parece que este mecanismo que también se sigue de manera similar en Canadá, Bélgica y Australia entre otros, puede ser realmente efectivo a la hora de acabar con los juicios paralelos y con las filtraciones. Sin embargo, en mi opinión, habría que ser extremadamente prudentes en su aplicación para que no perturbara el ejercicio del derecho a la información. Además, para que un sistema así fuera realmente eficaz y respetuoso, debería completarse con una adecuada transmisión de información de los asuntos judiciales por parte de la Administración de Justicia, como veremos en el siguiente apartado.

---

<sup>59</sup> Retrieved from: <https://www.gov.uk/contempt-of-court>

#### **d) Ministerio Fiscal y medios de comunicación**

Como hemos visto durante todo el trabajo, la publicidad procesal es un elemento imprescindible en los Estados de derecho y una exigencia, con sus excepciones, constitucional. Ha quedado patente el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en el ejercicio de este derecho, actuando como puente de aquello que sucede en los tribunales y la gente de a pie; este papel se acrecienta con respecto a acontecimientos penales que, en ocasiones, suelen tener una mayor repercusión en la opinión social. Sin embargo, como hemos visto también, esta labor, por diferentes razones, no ha funcionado siempre como debería y no ha sido del todo respetuosa con los derechos procesales de los afectados en el proceso. Una de las razones de la aparición de los juicios paralelos deriva en su origen, en palabras de Carrillo del Teso<sup>60</sup>, de que “la lejanía o la opacidad de los actores jurídicos no ayudan a crear ningún tipo de afinidad hacia su labor”. Los medios de comunicación deberían ser una herramienta de la Administración de justicia y no un “enemigo”. Por tanto, sería necesaria una figura intermediaria entre la Administración de Justicia y los Mass Media y es aquí donde entra el Ministerio Fiscal, y en especial la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado, que habla de este tema en particular.

El Ministerio Fiscal sería el agente mediador encargado de transmitir la información desde la Administración de Justicia a los medios de comunicación, con absoluto respeto a los derechos de los investigados y de las víctimas y, por supuesto, al secreto de sumario. Este papel mediador se funda en primer lugar en el art 20 de la CE que establece la obligación genérica a los poderes públicos de facilitar a los medios de comunicación su labor. Y, más específicamente, en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual en su artículo 4.5 recoge textualmente el deber de “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto de sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”. Esta función, a la que las fiscalías de nuestro país todavía son reacias, es fundamental para evitar la aparición de juicios paralelos y sus efectos lesivos, puesto que el MF funcionaría como un canal de información, oficial, veraz y lo más transparente y objetiva posible, evitando así que en ocasiones los medios

---

<sup>60</sup> CARRILLO DEL TESO, A., “Ministerio Fiscal y medios de comunicación” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 102.

de comunicación tengan que recurrir a otras fuentes poco fiables o que realicen sus propias elucubraciones

El MF tiene que compaginar esta función con su función de parte necesaria en los procesos penales y de instructor en algunas ocasiones, por lo que, para conciliar sus diversas funciones con la de “informador”, la Instrucción 3/2005 da una serie de pautas de actuación al MF con respecto este tema: en primer lugar, la Instrucción establece que en cada Fiscalía cada Fiscal Jefe deberá nombrar a un fiscal que actúe como Portavoz ante los medios de comunicación, pudiendo asumir el Fiscal Jefe dicha función; este portavoz será el encargado de transmitir la información de los diversos casos que se estén conociendo en la Fiscalía y los medios de comunicación; además, también establece la Instrucción que pueden usar como canal las Oficinas de Prensa de los TSJ, puesto que, a pesar de que el MF tiene asignada esta importante función de información, las Fiscalías no disponen de Gabinetes propios.

El Consejo Fiscal hizo varias referencias y propuestas acerca de este tema en el “Libro Blanco del Ministerio Fiscal” de 2013 y exponía que uno de los principales problemas era que los tiempos procesales eran mucho menos veloces que las informaciones periodísticas, por lo que al MF le resultaría muy difícil dar informaciones con la suficiente celeridad para que pudieran ser tomadas en cuenta a tiempo por los periodistas; para ello el Consejo da una serie de propuestas en las que cabe destacar la de elaborar servicios autónomos de información, al menos en las Fiscalías de las CCAA, y dotándolos de medios personales y materiales, mayor uso de la web del MF como canal de información, posición más activa por parte de los miembros del MF a colaborar en esta labor de información... Por último, debemos señalar en palabras de García Teso<sup>61</sup> que “la fecha de la Instrucción 3/2005 da cuenta de que no está pensada para las rápidas, más bien instantáneas, y, por tanto, susceptibles de no ser contrastadas, vías de información que se han abierto gracias a la proliferación de las redes sociales” y que una propuesta adecuada podría ser la creación de perfiles oficiales en redes sociales del MF para facilitar e impulsar el carácter informador de este y, además, hacerlo así más accesible a todos. Con referencia a esta última cuestión y para finalizar con este apartado, me gustaría hacer referencia a algunas declaraciones realizadas por Susana Gisbert<sup>62</sup>, Fiscal Portavoz I de

---

<sup>61</sup> CARRILLO DEL TESO, A., “Ministerio Fiscal y medios de comunicación” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 116.

<sup>62</sup> GISBERT, S., “Las cosas claras en lo relativo al Ministerio Fiscal y la comunicación” *Confilegal*, 2017. Retrieved from <https://confilegal.com/20171025-las-cosas-claras-lo-relativo-al-ministerio-fiscal-la-comunicacion/>

la Audiencia Provincial de Valencia, en la Revista jurídica ConfiLegal; en esta publicación, la Portavoz declara que resulta muy necesario un gabinete específico de información para las Fiscalías, como cuentan los TSJ con personal y medios propios y con sus páginas y redes sociales propias, puesto que, con respecto a la fiscalía, solo existe una cuenta en la red social Twitter del Consejo Fiscal que, además, es muy poco activa. Declara que, a pesar de que la figura de la Portavocía esté ya en todas las Fiscalías, se trata de una figura con muy poca importancia que ni es tomada en cuenta en el organigrama de la carrera fiscal, ni de las diferentes fiscalías. Por otro lado, muestra su disconformidad con el hecho de que las funciones de la Portavocía, tal y como están planteadas en la actualidad, son tremendamente difíciles de ejercer con diligencia puesto que ni se cuenta con gabinetes ni medios materiales, ni personales para ello, ni, por supuesto, con ninguna exención, por lo que el Portavoz debe compaginar este trabajo con sus funciones “habituales” de Fiscal.

Por tanto, como conclusión, creo que sería muy beneficioso para la sociedad en general, pero para los órganos judiciales y medios de comunicación en particular, reforzar el papel informador que por ley tiene el MF, e intentar acercar la Administración de justicia a los ciudadanos y opinión pública, valiéndose, por ejemplo, de las ventajas de las nuevas tecnológicas, como ya hacen muchos otros países vecinos.

## **6. CONCLUSIÓN**

Como conclusión, ha quedado patente a lo largo de todo el trabajo cómo los juicios paralelos afectan y colisionan con el correcto desarrollo de los juicios penales, y que, aunque no son lo habitual, son casi inevitables en los casos más mediáticos. Se ha analizado detalladamente cómo afectan a los derechos del artículo 24 de la CE. En el caso de la imparcialidad judicial, no se ha podido verificar que haya una influencia real en las decisiones de los jueces profesionales, pero que puede ocurrir en el caso de los juicios por tribunales populares. En todo caso, los jueces se ven totalmente presionados en estos juicios por los medios de comunicación, las movilizaciones sociales e, incluso, la propia clase política, y en muchas ocasiones, obligados a defender la independencia del poder judicial, algo básico en el Estado de Derecho en el que vivimos. Por otro lado, se ha estudiado también que es el derecho a la presunción de inocencia el que más perjudicado sale en estos juicios paralelos y que la protección actual existente es insuficiente, por lo que sería interesante plantear un sistema de protección de este derecho más allá del juicio



propriadamente dicho y que atendiera a las nuevas realidades y nuevas formas de vulneración del mismo, que se han producido con la aparición de las redes sociales y el mundo digital. Se ha realizado también un detallado análisis de la violencia sobre la mujer y el Derecho, es decir, desde los importantes pasos legislativos que se han ido produciendo en nuestro país para intentar acabar con esta lacra, como de los retos que todavía tenemos por delante. Creo que era necesario un estudio más detenido en este tema, puesto que es en los juicios de violencia sobre la mujer donde se producen más el fenómeno de los juicios paralelos y donde más presiones reciben los jueces, debido a las grandes movilizaciones que se suelen producir de apoyo incondicional a la víctima. Como se ha visto, la falta de sensibilidad que se le achaca en estos casos a los jueces es, en la mayoría de los casos, falta de formación especializada y es ese uno de los grandes retos que debemos de afrontar como Estado de Derecho. Una justicia más formada será una justicia de mayor calidad y en la que la ciudadanía confiará más.

Por otro lado, se ha expuesto como con la revolución digital y de las redes sociales el fenómeno de los juicios paralelos se ha multiplicado y se ha hecho, si cabe, más incontrolable. Con la legislación actual es sumamente difícil proporcionar por parte de la Administración de Justicia una adecuada protección a los derechos del investigado, puesto que nuestro Ordenamiento Jurídico no ha respondido por ahora a las nuevas formas de lesión y vulneración de derechos fundamentales que se producen en las redes sociales, llegando a un escenario que hemos denominado como “posverdad” en el que es prácticamente imposible diferenciar la opinión, de la información.

Se han propuesto una serie de soluciones cuya aplicación sería interesante estudiar. En particular, creo que es especialmente importante fomentar la responsabilidad de los propios medios de información, puesto que lo ideal sería que ellos mismos dieran mayor peso a la emisión de noticias veraces, éticas y respetuosas con los derechos de las partes, que a la avalancha de noticias y programas sensacionalistas en los que el concepto de veracidad se ve poco a poco diluido. Esto no solo sería bueno para la Administración de Justicia y para la sociedad en general, sino para el propio crédito y confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación que, en los últimos años, ha sido puesto realmente en cuestión. Por otro lado, como ya se ha mencionado es imprescindible una correcta formación jurídica de los profesionales encargados de las noticias relacionadas con procesos judiciales, puesto que la falta de formación de los periodistas con la nula formación en derecho que tiene la ciudadanía provoca una gran falta de rigor y precisión a la hora de tratar estos procedimientos. Además, si la ciudadanía estuviera más formada

en derecho, en particular en los derechos fundamentales, sería más crítica y menos manipulable frente a las informaciones poco objetivas que recibe e incluso más responsable respecto a las opiniones o informaciones que pueden emitir a nivel particular en las redes sociales sobre un caso o proceso pendiente.

Por último, hacer referencia a que, desde mi punto de vista, uno de los retos que debe afrontar la Administración de Justicia en nuestro país es acabar con la opacidad y lejanía con la que la sociedad la percibe. La justicia y sus órganos son servicios públicos que están ahí para defender los intereses y derechos de la ciudadanía y, por tanto, deberían ser percibidos por ésta como una institución cercana y de confianza. Algo que no es incompatible con mantener el renombre y la profesionalidad que le caracteriza. Ese acercamiento a la ciudadanía pasa por una mayor comunicación entre la Administración de Justicia, en particular el Ministerio Fiscal, y los medios de comunicación que son el puente entre las noticias y la sociedad. Además, como he expuesto, sería una solución bastante eficaz para mermar los efectos de los juicios paralelos.

En conclusión, los juicios paralelos son un fenómeno en nuestra sociedad que se han visto potenciados por la era digital y las redes sociales y, si bien no es un problema crucial de nuestra Justicia actual, tanto la sociedad como los propios medios deberían poner todo su esfuerzo en acabar con ellos. Puesto que lo deseable, en cualquier democracia y Estado de Derecho, es el respeto a los derechos fundamentales y a las garantías procesales de los implicados en un procedimiento y, por supuesto, la independencia absoluta del Poder Judicial.

## **7. BIBLIOGRAFÍA**

- ARAGÓN REYES, M., “Independencia judicial y libertad de expresión” *Derecho Privado y Constitución nº10*, 1996.
- BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES. Congreso de los Diputados. Serie D. Número 199 de 3 de agosto de 2017
- BUENO DE MATA F., “El principio de publicidad procesal ante la tecnología: juicios mediáticos redes sociales y big data” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- CALAMANDREI, P., “*Demasiados abogados*” Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960.

- CARRILLO DEL TESO, A., “Ministerio Fiscal y medios de comunicación” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- CARRIZO GONZÁLEZ CASTELL, A., “Juicios paralelos y violencia sobre la mujer: de la posible influencia del “yo si te creo” en las decisiones judiciales”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- CERDÁN ALENDA, M. (2010): “El periodista ante el secreto del sumario”. *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, 2010.
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. *Informe de los Juzgados de Violencia de género por CCAA del 4 enero de 2018*. Retrieved from:
- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. *Folleto sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 2017*. Retrieved from: <https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/home.htm>
- ESPÍN TEMPLADO, E., “nº especial XIII”, *Revista Poder Judicial*, CGPJ, 1990, Madrid.
- FAPE, Código Deontológico, 2020. Retrieved from: <http://fape.es/home/codigo-deontologico/>
- FRASCAROLI, M. S. “*Justicia Penal y medios de comunicación. La influencia de la difusión masiva de los juicios criminales sobre los principios y garantías procesales*” Ad-Hoc, Buenos Aires 2004.
- GARCÍA-PERROTE FORN, E., “*Los juicios paralelos*”, Atelier, Barcelona, 2017.
- GUTIERREZ ROMERO, FM., “*La nueva ley de violencia de género, aspectos prácticos y sustantivos*” Estudio doctrinal, Ministerio de Justicia, 2004. Retrieved from: [https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344080991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D2005\\_1990.pdf&blobheadervalue2=1288778710483](https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344080991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D2005_1990.pdf&blobheadervalue2=1288778710483)

- GÚZMAN FLUJA, V., “Juicios paralelos en las redes sociales y proceso penal” *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, n° 27, septiembre 2018. Retrieved from: [https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/juicios-paralelos-redes-sociales-757578165#section\\_3](https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/juicios-paralelos-redes-sociales-757578165#section_3)
- HUERTAS MARTÍN, I. “Proceso penal y comunicación en el S.XXI: el inevitable juicio paralelo, el prescindible juicio paralelo show”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- LETURIA, F., “La problemática de los juicios paralelos en la jurisprudencia y doctrina española” *Ius et Praxis* vol.23 no.2, 2017. Retrieved from: [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-00122017000200021](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122017000200021)
- MARTÍN LÓPEZ P., “Los Juzgados de lo penal especializados en Violencia de género: Implementación y retos”, Curso: Valoración del funcionamiento de los juzgados penales especializados en violencia sobre la mujer. Marzo 2016.
- MARTÍN, P., “Los Juzgados de lo penal especializados en Violencia de género: Implementación y retos” Curso: Valoración del funcionamiento de los juzgados penales especializados en violencia sobre la mujer, 2013. Retrieved from: <http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/OBSERVATORIO%20DE%20VIOLENCIA%20DOM%C3%89STICA/OTRAS%20ACTIVIDADES%20FORMATIVAS/FICHEROS/20130502%20JP%20Los%20Juzgados%20de%20lo%20Penal%20especializados....pdf>
- MATUTE CHAMARRO, I., “Los delitos de odio en las redes sociales”. Trabajo Fin de Título del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Salamanca, 2017.
- MINISTERIO DE JUSTICIA, *Cartografía partidos judiciales*, 2020. Retrieved from: <https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-justicia/cartografia-judicial>
- OLIVA MARAÑÓN, C., “La formación jurídica del periodista en España: una necesidad para satisfacer el Derecho de la Información y el Derecho a la Información” *Revista de Docencia Universitaria*, Universidad Rey Juan Carlos, Vol. 12 (3), N.º extraordinario, 2014.
- ORENSES RUIZ, JC., “El control no jurisdiccional de los juicios en televisión por parte de las autoridades audiovisuales” *Dilemata*, n° 14, 2014.

- PODER JUDICIAL, Formación violencia de género, 2020. Retrieved from: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Formacion/>
- PRAT WESTERLINDH, C., “*Relaciones entre poder judicial y los medios de comunicación*”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- QUINTERO OLIVARES, G., “Libertad de prensa y protección de la independencia e imparcialidad judicial” *Revista del poder Judicial n1 especial XVIII*, CGPJ, Madrid.
- RECLUSA ETAYO, A., “Juicios paralelos: un desafío que pone en riesgo los derechos fundamentales de las partes del proceso” Abogacía española, Consejo General, 2013. Retrieved from: <https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/juicios-paralelos-un-desafio-que-pone-en-riesgo-los-derechos-fundamentales-de-las-partes-del-proceso/>
- REIFARTH MUÑOZ W., “Inulto l’atroce insulto?: imparcialidad judicial y libertades de expresión e información” *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- SAN MIGUEL CASO, C., “La cobertura mediática en el sistema de la estrategia de la defensa penal”, *Justicia Penal Pública y Medios de Comunicación*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.
- VARELA CASTRO, L., “Proceso penal y publicidad”. *Jueces para la Democracia*, n.º 11, 1990.
- VEGA RUIZ, J.A., “*Libertad de expresión, información veraz, juicios paralelos y medios de comunicación*”, Universitas, Madrid, 1998.

## Noticias

- CARBALLAR, O., “La formación con perspectiva de género no existe en las facultades de Periodismo” *La Marea*, 2016. Retrieved from <https://www.lamarea.com/2016/09/18/la-formacion-perspectiva-genero-no-existe-las-facultades-periodismo/>
- CARBALLAR, O., “Feminicidios: asignatura pendiente del periodismo” *La Marea*, 2020. Retrieved from <https://www.lamarea.com/2020/01/22/feminicidios-asignatura-pendiente-del-periodismo/>

- DIARIO JURÍDICO “Los juicios paralelos: entre la libertad de información y los peligros de convertirse en un juez mediático”, *Diario Jurídico*, 2012. Retrieved from <https://www.diariojuridico.com/los-juicios-paralelos-entre-la-libertad-de-informacion-y-los-peligros-de-convertirse-en-juez/>
- DIARIO JURÍDICO, “Los juicios paralelos: entre la libertad de información y los peligros de convertirse en juez mediático” , *Diario Jurídico*, 2012. Retrieved from: <https://www.diariojuridico.com/los-juicios-paralelos-entre-la-libertad-de-informacion-y-los-peligros-de-convertirse-en-juez/>
- EUROPAPRESS, “El Consejo Audiovisual afea "juicios paralelos" sobre Ana Julia Quezada en los medios durante la vista oral”, *Europapress*, 2019. Retrieved from <https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-caa-afea-continuas-insinuaciones-juicios-paralelos-ana-julia-quezada-medios-vista-oral-20191031125323.html>
- GISBERT, S., “Las cosas claras en lo relativo al Ministerio Fiscal y la comunicación” Confilegal, 2017. Retrieved from <https://confilegal.com/20171025-las-cosas-claras-lo-relativo-al-ministerio-fiscal-la-comunicacion/>
- GOODMAN A., “Si no paras de decir mentiras el concepto de verdad simplemente desaparece” *CTCX Contexto y acción*, 2020. Retrieved from <https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31960/noam-chomsky-trump-sanidad-pandemia-mentiras-sociopatas.htm>
- JABOIS M., “A la caza de la familia Quer” *Diario El País*, 2018. Retrieved from: [https://elpais.com/politica/2018/01/03/actualidad/1515008214\\_301244.htm](https://elpais.com/politica/2018/01/03/actualidad/1515008214_301244.htm)  
17
- LÓPEZ N., “¿Qué propone la ley de libertad sexual del Ministerio de Igualdad? Preguntas y respuestas” *Newtral*, 2020. Retrieved from: <https://www.newtral.es/que-propone-la-ley-de-libertad-sexual-del-ministerio-de-igualdad-preguntas-y-respuestas/20200306/>
- LÓPEZ N., “Más juzgados especializados en violencia machista: así es la propuesta del Poder Judicial” *Newtral*, 2020. Retrieved from: <https://www.newtral.es/mas-juzgados-especializados-en-violencia-machista-asi-es-la-propuesta-del-poder-judicial/20200214/>
- MONT CASTRO, L., “Los juicios paralelos: un problema clásico magnificado por la red” *Diario jurídico*, 2014. Retrieved from:

<https://www.diariouridico.com/los-juicios-paralelos-un-problema-clasico-magnificado-por-la-red/>

- RINCÓN, R., “Los expertos discrepan de puntos clave del proyecto de ley de libertad sexual” *Diario El País*, 2020. Retrieved from: <https://elpais.com/espana/2020-03-04/los-expertos-discrepan-de-puntos-clave-del-proyecto-de-ley-de-libertad-sexual.html>
- RODRIGUEZ, G., “Pacto histórico para atajar la violencia contra la mujer” *Diario El País*, 2017. Retrieved from: [https://elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500883885\\_958602.html](https://elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500883885_958602.html)
- RTVE, “La ley contra la Violencia de Género cumple 15 años: los retos y las asignaturas pendientes”, *RTVE*, 2019. Retrieved from: <https://www.rtve.es/noticias/20191228/ley-contra-violencia-genero-cumple-15-anos-retos-asignaturas-pendientes/1994563.shtml>
- RUIS MORENO, E., “Juicios Paralelos en la época de la posverdad”, *Medium*, 2019. Retrieved from: <https://medium.com/@esther.ruiz/juicios-paralelos-en-la-%C3%A9poca-de-la-posverdad-49842a4f845>
- SÁNCHEZ, N., “La defensa de Ana Julia Quezada solicita que se repita el juicio ante un tribunal profesional” *Diario El País*, 2019. Retrieved from: [https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/1572437598\\_605017.html](https://elpais.com/sociedad/2019/10/30/actualidad/1572437598_605017.html)

### Recursos informáticos

- ASOCIACIÓN DE PRENSA. Retrieved from: [http://www.asociacionprensa.org/es/images/Codigo\\_Deontologico\\_Europeo\\_de\\_la\\_Profesion\\_Periodistica.pdf](http://www.asociacionprensa.org/es/images/Codigo_Deontologico_Europeo_de_la_Profesion_Periodistica.pdf)
- GOBIERNO REINO UNIDO. Retrieved from: <https://www.gov.uk/contempt-of-court>
- GUÍAS JURÍDICAS. Retrieved from: [https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQxNjtbLUouLM\\_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALb0e4DUAAAA=WKE](https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjQxNjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoALb0e4DUAAAA=WKE)
- XUNTA DE GALICIA. Retrieved from: <http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/el-convenio-de-estambul-sobre-violencia-contra-la-mujer-entrara-en-vigor-el-1-de-agosto>

**Sentencias**

STC 1771/1990 de 12 de noviembre.

STC 69/2001 del 17 de marzo.

STC 187/1999 de 25 de octubre.

STC 136/1999 de 20 de julio.

STC 60/1995 del 17 de marzo.

STC 13/1985 de 31 de enero.

STC 30/1982 de 28 de junio.

STC 56/2004 de 19 de abril.

STC 109/1986 de 24 de septiembre.

STC 129/1995 de 11 de septiembre.

STC 166/1995 de 20 de noviembre.

STC 6 / 1988 de 21 enero.

STEDH 26 abril de 1979.